



**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SOBRE PAGO DE
BENEFICIOS SOCIALES; EXPEDIENTE N° 00176-2015-
0-3101-JR-LA-01; DISTRITO JUDICIAL DE SULLANA-
SULLANA, 2020**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIA
POLÍTICA**

Autora

ROA JARAMILLO DIANNE MARIBEL

Tutor

CHECA FERNANDEZ, HILTON ARTURO

Sullana – Perú

2020

2.- EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

ROA JARAMILLO DIANNE MARIBEL

ORCID: 0000-0002-0358-6969

ASESOR

Mg. Checa Fernández, Hilton Arturo

ORCID: 0000-0002-0358-6970

JURADO

Mg. Villanueva Butrón, José Felipe

ORCID: 0000-0002-0358-6970

Mg. Rafael Bayona Sánchez

ORCID: 0000-0002-8788-9791

Abg. Luís Robles Prieto

ORCID: 0000-0002-9111-936X

3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

Mg. Butrón Villanueva, José Felipe
Presidente

Mg. Bayona Sánchez, Rafael Humberto
Secretario

Abg. Luís Enrique Robles Prieto
Miembro

Mg. Checa Fernández, Hilton Arturo
Asesor

4. AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA

En primer lugar, a Dios por permitirme tener y disfrutar a mi familia, gracias a mi familia por apoyarme en cada decisión y proyecto, gracias a la vida porque cada día me demuestra lo hermosa que es la vida y lo justa que puede llegar a ser, gracias a mi familia por permitirme con excelencia en el desarrollo de mi proyecto, gracias por creer en mí y gracias a Dios por permitirme vivir y disfrutar de cada día.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mi hermana, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional. A mis padres por su apoyo incondicional, amor y confianza.

5. RESUMEN

La investigación tuvo como problema: ¿Cuáles son las características del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020?, Es de tipo, cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de contenido; y como instrumento una lista de cotejo o guía de observación de procesos judiciales, los resultados revelaron que el proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana- Sullana; 2020; evidenció las siguientes características: cumplimiento de plazo; debido proceso se cumplieron en el proceso.

Palabras clave: Caracterización, Pago de beneficios sociales, Proceso, Proceso Laboral,

6. ABSTRACT

The investigation had as a problem: What are the characteristics of the process on Payment of social benefits in file No. 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Sullana-Sullana Judicial District; 2020? Is of type, qualitative, descriptive exploratory level, and non-experimental, retrospective and transversal design. The unit of analysis was a judicial file, selected through convenience sampling; observation and content analysis techniques were used to collect the data; and as an instrument a checklist or observation guide of judicial processes, the results revealed that the judicial process on Payment of social benefits N ° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Sullana-Sullana Judicial District; 2020; evidenced the following characteristics: deadline compliance; due process were met in the process.

Key words: Characterization, Payment of social benefits, Process, Labor Process,

Contenido

1. TÍTULO DEL INFORME.....	i
2.- EQUIPO DE TRABAJO.....	ii
3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR	iii
4. AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA	iv
DEDICATORIA.....	iv
5. RESUMEN	v
6. ABSTRACT.....	vi
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA.....	11
2.1.1. Antecedentes Internacionales:.....	11
2.1.2 Antecedentes Nacionales	14
2.1.3. Antecedentes Locales	16
2.2. BASES TEÓRICAS.....	17
2.2.1. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Procesales relacionados con las sentencias en estudio	17
2.2.1.1. La jurisdicción.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.1.1. Conceptos.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.1.2. Elementos de la jurisdicción	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.1.3. Principios constitucionales aplicables a la función jurisdiccional..	Error!
Bookmark not defined.	
2.2.1.1.3.4. Principio de Motivación escrita de las resoluciones judiciales ...	Error!
Bookmark not defined.	
2.2.1.2. La Competencia	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.2.2. Regulación de la competencia	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.2.3. Determinación de la competencia en materia civil ..	Error! Bookmark not defined.
defined.	
3.2.1.2.4. Determinación de la competencia en el proceso en estudio	22
2.2.1.3. El proceso.....	22
2.2.1.4. El proceso como garantía constitucional	22
2.2.1.5. El debido proceso formal	22
2.2.1.5.2. Elementos del debido proceso	23
2.2.1.6. El proceso laboral	26
2.2.1.7. El proceso ordinario laboral	26
2.2.1.8. El pago de beneficios sociales.....	27
2.2.1.9. Los puntos controvertidos en el proceso.....	27
2.2.1.9.2. Los puntos controvertidos en el proceso judicial en estudio.....	28

2.2.1.10. La prueba.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.10.3. Concepto de prueba para el Juez	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.10.4. El objeto de la prueba.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.10.7. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio	33
2.2.1.11. La Sentencia	34
2.2.1.11.2. Estructura contenido de la sentencia.	34
2.2.1.11.4. Principios relevantes en el contenido de la sentencia	36
2.2.1.12. Los Medios Impugnatorios.	37
2.2.1.12.2. Clases de medios impugnatorios.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.12.3. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio	38
2.2.2. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Sustantivas relacionados con las sentencias en estudio	39
2.2.2.1. Identificación de la pretensión resulta en la sentencia	39
2.2.2.2. Desarrollo de instituciones jurídicas previas, para abordar el Pago de beneficios sociales.....	39
2.2.2.2.1. Beneficios Sociales.....	39
2.2.2.2.1.2. Beneficios sociales que tenemos	39
2.2.2.2.1.2.1. Gratificaciones	39
2.2.2.2.1.2.2. Compensación por tiempo de servicios	41
2.2.2.2.1.2.3. Descanso Vacacional Anual	43
III. Hipótesis	45
3.1. Hipótesis General.....	45
3.2. Hipótesis específicas.....	45
4. METODOLOGÍA.....	46
4.1. Diseño de la investigación.....	47
4.2. Población y Muestra	48
4.3. Definición y operacionalización de la variable e indicadores	49
4.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos.....	50
4.5. Plan de análisis	51
4.6. De las técnicas y procedimiento de recolección de datos.....	52
4.7. Matriz de consistencia lógica	53
Cuadro2. Matriz de consistencia	54
4.8. Principios éticos.....	56
V.- RESULTADOS	57
5.1.- Resultados:	57
Cuadro 1. Respecto al cumplimiento de los plazos	57
Cuadro 2. Respecto de las condiciones que garantizan el debido proceso	58

5.2. Análisis de resultados	59
VI. CONCLUSIONES	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	62
ANEXO 1: Cronograma de Actividades.....	66
ANEXO 2: Presupuesto	67
ANEXO 3: Instrumento de Recolección de Datos.....	67
ANEXO 4 – Evidencia del proceso	73
ANEXO 5-Guía de observación.....	107
Anexo 6. Declaración de compromiso ético	108

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación estará referida a la caracterización del proceso judicial *sobre Pago de beneficios sociales* en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana, Perú. 2020.

Con relación a la caracterización, puede conceptuarse como la determinación de atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás (Real Academia Española, s.f, primer párrafo). En este sentido, para resolver el problema planteado y detectar las características del proceso judicial (objeto de estudio) se tomarán como referentes contenidos de fuentes de naturaleza normativa, doctrinaria y jurisprudencial aplicables a un proceso civil.

Respecto al proceso puede conceptuarse, como el medio o herramienta que los órganos jurisdiccionales utilizan para atender a los justiciables que solicitan la defensa de sus derechos; por lo tanto, está dirigido por el juez, quien está facultado para aplicar el derecho que corresponda y resolver la controversia planteada ante su despacho.

En cuanto al presente estudio, se trata de una propuesta de investigación derivada de la Línea de Investigación de la Carrera Profesional de Derecho, cuyo fin último es profundizar el conocimiento en las diversas áreas del derecho.

En este orden, el presente trabajo se realizará de acuerdo a la normatividad interna de la universidad, tendrá como objeto de estudio un proceso judicial cierto, que registra evidencias de la aplicación del derecho; asimismo, entre las razones que impulsan a profundizar el estudio de éste ámbito de la realidad son diversos hallazgos que dan cuenta de la existencia de una situación problemática, de los cuales se cita el siguiente:

En el año 2015, los resultados de la encuesta orientada a verificar el grado de satisfacción de ciudadanos sobre el funcionamiento de los tribunales en 10 países de América Latina y, reveló que: Paraguay es el país de menor confianza ciudadana, dado que, los encuestados le otorgaron un puntaje medio de 32,7 sobre 100, por eso ocupó

el primer lugar; por su parte, el Perú se ubicó en el segundo lugar, con 35.5; el tercero fue Ecuador con 38,6; seguidos de Haití (39,6); Bolivia (40,4; Argentina (41,1); Venezuela (41,9); Trinidad y Tobago (42,6); Chile (44,1); Guatemala (44,4); al finalizar, en el informe se concluye que, en éstos países existe debilidad institucional; inestabilidad política en las últimas décadas, con bruscos cambios de un gobierno a otro y, en otros interrupciones gubernamentales (INFOBAE América; 2015) estas situaciones que se indicarán en líneas posteriores impulsan a realizar estudios sobre aspectos que conforman la realidad judicial peruana.

Enunciado del problema

¿Cuáles son las características del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020?

Para resolver el problema de investigación se trazaron los siguientes objetivos.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Determinar las características del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana, 2020.

Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general los objetivos específicos serán:

- 1.- Identificar las características cumplimiento de plazo y condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020.
2. -Describir las características del cumplimiento de plazo y condiciones que garantizan el debido proceso, en el proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana- Sullana; 2020

El estudio se justifica, porque aborda una variable perteneciente a la Línea de Investigación orientada a contribuir en la mitigación y solución de situaciones problemáticas que involucran al sistema justicia; dado que, a las instituciones que conforman el sistema justicia se les vincula con prácticas de corrupción y que en el Perú, existe debilidad gubernamental (Herrera, 2014); por lo tanto, la sociedad no les otorga su confianza, conforme revelan los resultados de una encuesta aplicada el mismo año, donde, el 85% de una población de 1,210 personas rechazó el trabajo en materia justicia (Diario, El Comercio sección Política; 2014).

También se justifica; porque es una actividad sistemática que coloca al investigador frente a frente con el fenómeno en estudio (las sentencias); por lo tanto, dicha experiencia facilitará la verificación del derecho, procesal y sustantivo, aplicado al proceso; también facilitará, constatar los actos procesales de los sujetos del proceso; los cuales contribuirán a que el investigador pueda identificar, recolectar los datos e interpretar los resultados; implicará, además, aplicar una revisión constante de la literatura general y especializada como recurso cognitivo necesario para identificar caracterización del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° Pago de beneficios sociales. Evidentemente tratándose del análisis de las sentencias de primera y segunda instancia un solo proceso judicial, los resultados de éste contribuirán a facilitar la realización de trabajos consolidados, donde será posible constatar si existe homogenización de criterios para resolver controversias similares.

En la metodología se ha previsto lo siguiente: 1) La unidad de análisis, se trata de un proceso judicial documentado (Expediente judicial – éste, representará la base documental de la presente investigación) para seleccionarlo, se aplicó un muestreo no probabilístico, denominado muestreo intencional); 2 Las técnicas que se aplicarán para la recolección de datos serán observación y el análisis de contenido y, el instrumento que se usará, será una guía de observación y notas de campo; 3) Por su parte, la construcción del marco teórico, que guiará la investigación, será progresiva y sistemáticamente, en función a la naturaleza del proceso existente en el expediente (habrán contenidos de tipo procesal y sustantivo, lo cual dependerá de la naturaleza

del proceso y de la pretensión judicializada); 4) La recolección y plan de análisis de datos, será por etapas: se aplicará una aproximación progresiva al fenómeno (mediante lecturas analíticas descriptivas) e identificación de los datos requeridos, en función a los objetivos y las bases teóricas de la investigación, para asegurar su asertividad; 5) Los resultados se presentarán en cuadros con evidencias empíricas tomadas del objeto de estudio para asegurar la confiabilidad de los resultados.

En el Perú la Constitución Política establece la división de poderes, y también establece las facultades que le corresponden al Poder Judicial para administrar justicia a nombre de la nación; por su parte la ley orgánica de ésta institución regula su organización interna y competencia de cada uno de los órganos que lo conforman, que se complementa con normas procesales respectivas que conforman el sistema jurídico peruano, esto es para atender las demandas de justicia y solución de controversias de naturaleza, penal, civil, laboral, etc., planteadas por los justiciables.

En éste sentido, el Poder Judicial, es una institución comprometida en la construcción, vigencia y garante de la paz social, la seguridad jurídica y el desarrollo económico; respecto a éste último asunto, Mendoza citado por Herrera (2014) expone: “(...) no es posible medir el nivel de desarrollo del país si no se toma en consideración la calidad del servicio de justicia” (p. 78).

En opinión de Herrera (2014):

“(...) el planteamiento que formula Mendoza, tiene relación directa con la competitividad; que es materia de análisis por diferentes indicadores internacionales; donde se incluye: evaluaciones del servicio de justicia, resultados que ayudan a formar la percepción de los inversionistas nacionales y extranjeros respecto de la seguridad existente en cada país para proteger sus inversiones. Por ejemplo, en los resultados del estudio de Libertad Económica 2014, el Perú se ubicó en el puesto 47, y entre sus principales problemas que afectan las libertades analizadas, se hallaron la corrupción gubernamental y la debilidad para defender los derechos de propiedad. Asimismo en, la Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción en el Perú 2013 señaló que sus principales problemas son la delincuencia y la corrupción, y que las instituciones

más corruptas son el Congreso de la República, la Policía Nacional y el Poder Judicial, entidades, estas últimas, de la administración pública, las cuales, junto con el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, la Academia de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura, integran el sistema de administración de justicia (p. 78).

Como puede advertirse fuentes externas e internas, al ámbito judicial del Perú refieren problemas que involucran a la realidad judicial nacional; donde coexisten variables diversas.

En lo que comprende a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote las investigaciones individuales forman parte de una línea de investigación. En este sentido, éste proyecto se deriva de la línea antes citada y tiene como objeto de estudio las sentencias de primera y segunda instancia.

Con ésta finalidad el expediente seleccionado para elaborar el presente trabajo registra un proceso judicial de tipo laboral, la pretensión judicializada es Pago de beneficios sociales, el número asignado es N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020.

En el contexto internacional:

Arenas & Ramírez, (2009)

Concluyen que en España, toda sentencia produce una consecuencia jurídica que trasciende no solo en el plano judicial, sino también en lo social, de ahí la complejidad de acercarlas lo más fielmente posible a la realidad. Las sentencias son resultado del razonamiento deductivo: unos hechos determinados que se declaran probados, se subsumen en el supuesto fáctico de una norma jurídica para extraer así la consecuencia prevista en ésta, siendo la lógica el elemento fundamental que estructura su contenido; que para determinarlo juegan un papel trascendente el enfrentamiento o debate de las partes, en la que cada una defenderá sus puntos de vista apoyándose

en las teorías que estimen convincentes, exponiendo los hechos ocurridos y las pruebas que los apoyan, a fin de persuadir al Tribunal y convencer a los jueces mediante la argumentación. (p. s/n)

Por su parte en América latina

Ordoñez, (2003)

La administración de Justicia constituye uno de los escenarios decisivos que permiten verificar la vigencia o prescindencia de los derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas, este ámbito se prueba, en definitiva, si las libertades y garantías enunciadas en los diferentes instrumentos del derecho internacional, al ser violentados, tienen una aplicación real en el interior de las comunidades humanas. En buena medida, la estructura valorativa y normativa de los derechos humanos cobra eficacia y validez sólo desde el momento en que los reclamos concretos por violaciones a sus disposiciones son resueltos efectivamente por las instancias Jurisdiccionales. (p. s/n)

En relación al Perú:

Pásara, (2010)

En lo que corresponde al Perú de los últimos años se observa, niveles de desconfianza social y debilidad institucional de la administración de justicia, alejamiento de la población del sistema, altos índices de corrupción y una relación directa entre la justicia y el poder, lo cual es negativo. Asimismo, se reconoce, que el sistema de justicia pertenece a un viejo orden, corrupto en general con serios obstáculos para el ejercicio real de la ciudadanía por parte de las personas. (p. s/n)

En el Perú la Administración de Justicia sobre Desalojo existe una Ley General sobre la cual se norma el derecho a la propiedad inmueble lo cual se ve que el Poder Judicial tiene objetivos específicos que cumplir y para ello se le ha dotado una estructura y una variedad de instrumentos que, en principio, bien operados y eficazmente desarrollados, debieran permitirle alcanzar su objetivo primordial: la solución de los

conflictos y, junto con ello, ganarse la confianza de la Sociedad. Sin embargo, la situación actual de la Institución demuestra que su actuación no es ni predecible ni confiable, y que por el contrario, su actuación suele estar plagada de inconsistencias. (Siles, 2010).

Por otro lado en el ámbito local la administración de justicia en el Distrito Judicial del Santa, se creó para ser un distrito organizado, moderno y eficiente, que brinde un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la administración de justicia; integrado por fiscales, médicos, funcionarios y profesionales con una cultura humanista de sólidos valores morales y éticos, elevada mística y compromiso para enfrentar nuevos retos, que inspiren la confianza de la sociedad, el respeto del Estado y el orgullo Institucional. Sin embargo, los diversos cuestionamientos a esta institución por parte de la población se fundamentan en la falta de transparencia para sentenciar. Asimismo, mientras la fiscalía cumple su labor, emite sus dictámenes, tramita sus denuncias que son acogidas por los Jueces de Primera Instancia, estos emiten el mandato de detención y en pocos días son revocados por la Segunda Instancia, es decir, por las Salas Penales. El problema viene entre los jueces de Primera Instancia y los de Segunda Instancia, se les pide que unifiquen criterios y definan cuando una persona tiene que permanecer en la cárcel o liberarla. No es posible que a un funcionario corrupto que un juez lo pone tras la rejas, en horas o días otro juez lo esté liberando, entonces hay una inconsistencia en el sistema de administración de justicia (Checa, 2009).

En el ámbito local

En el norte, en los últimos años se observa, niveles de desconfianza social y debilidad institucional de la administración de justicia, alejamiento de la población del sistema, altos índices de corrupción y una relación directa entre la justicia y el poder, lo cual es negativo. (Diario Correo, 2013).

Tiene relación que en el Distrito Judicial preocupa el incremento de delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, que los pobladores del Distrito Judicial cometen por diversas circunstancias entre ellas el no pago de las pensiones alimenticias. En el Diario el

Tiempo (2015) Los Jueces indican que está cifra podría aumentar y acumularse en las audiencias públicas, reiterándose pedidos a las autoridades para crear una nueva sala de investigación preparatoria en el juzgado de Talara a fin de descongestionar las audiencias.

Por esta razón el referente para éste proyecto individual, es la línea de investigación, que en la Carrera Profesional de Derecho se denomina “Instituciones jurídicas de derecho Público y Privado” en el área de la Administración de Justicia en el Perú” aprobada mediante resolución de Rectorado N° 0011-2020-CU-ULADECH católica, de fecha 15 de enero del 2020; la misma que se encuentra en el módulo de investigación del portal de la Universidad Católica Los ángeles de Chimbote. y estará referida a la caracterización del proceso judicial sobre Nulidad de Resolución Administrativa y pago de intereses legales, del expediente N° 00005-2016-0-3101-JR- CI-01 del distrito judicial de Sullana-Sullana, 2020.

En el Reglamento de Investigación – Versión 14 (ULADECH, 2019), nuestro proyecto, tienen una estructura establecida el anexo 4 del referido reglamento.

La directriz de investigación es un documento de guía para los sub proyectos que buscan determinar la caracterización de los procesos judiciales existentes en un expediente judicial, como base documental del trabajo de fin de carrera.

¿Cuáles son las características del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020?

Para resolver el problema se traza un objetivo general

Determinar las características del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020.

Asimismo, para alcanzar el objetivo general, se trazan seis objetivos específicos relacionados con cada parte de la sentencia los cuales son:

- 1.- Identificar las características del debido proceso en el proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020.
2. -Describir las características del debido proceso en el proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; Distrito Judicial de Sullana-Sullana; 2020

Justificación de la investigación

El estudio se justifica, porque aborda una variable perteneciente a la Línea de Investigación orientada a contribuir en la mitigación y solución de situaciones problemáticas que involucran al sistema justicia; dado que, a las instituciones que conforman el sistema justicia se les vincula con prácticas de corrupción y que en el Perú, existe debilidad gubernamental (Herrera, 2014); por lo tanto, la sociedad no les otorga su confianza, conforme revelan los resultados de una encuesta aplicada el mismo año, donde, el 85% de una población de 1,210 personas rechazó el trabajo en materia justicia (Diario, El Comercio sección Política; 2014).

También se justifica; porque es una actividad sistemática que coloca al investigador frente a frente con el fenómeno en estudio (el proceso judicial); por lo tanto, dicha experiencia facilitará la verificación del derecho, procesal y sustantivo, aplicado al proceso; también facilitará, constatar los actos procesales de los sujetos del proceso; los cuales contribuirán a que el investigador pueda identificar, recolectar los datos e interpretar los resultados; implicará, además, aplicar una revisión constante de la literatura general y especializada como recurso cognitivo necesario para identificar las características del proceso judicial. Evidentemente tratándose del análisis de un solo proceso judicial, los resultados de éste contribuirán a facilitar la realización de trabajos consolidados, donde será posible constatar si existe homogenización de criterios para resolver controversias similares.

En el estudiante, permitirá fortalecer su formación investigativa, mejorar su capacidad de lectura interpretativa, analítica y, la defensa de los hallazgos, facilitará observar su

formación y nivel profesional.

Metodológicamente, es una propuesta respetuosa de la logicidad del método científico; puede ser adaptado para examinar perfiles de otros procesos y, contribuir en la construcción de instrumentos de investigación: lista de cotejo o guía de observación de procesos judiciales, por lo tanto, los destinatarios de los resultados son diversos: responsables de la política justicia, jueces, abogados, docentes, estudiantes, etc.

Respecto a la metodología, se trata de un estudio de caso, basado en parámetros de calidad extraídos de la revisión de la literatura que serán desarrollados en el marco teórico conceptual del trabajo; el nivel de la investigación es exploratorio descriptivo; porque el estudio aborda contextos poco frecuentados; la fuente de información es el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, del Distrito judicial de Sullana, en el Primer Juzgado Civil de Sullana, que es elegido mediante muestreo no probabilístico llamado técnica por conveniencia, los criterios de inclusión son: proceso concluido con interacción de ambas partes y con sentencias de primera y segunda instancia; para la recolección de datos está previsto aplicar las técnicas de la observación, el análisis de contenido y una lista de cotejo.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Dentro del presente trabajo se han hallado investigaciones realizadas por algunos estudiosos del derecho donde si bien no se han encontrado estudios similares al tema en investigación, si se han hallado algunos muy cercanos al objeto de estudio, motivo por el cual se pasa a citar:

2.1.1. Antecedentes Internacionales:

En Argentina (Godio M, 2013) investigó y llegó a las siguientes conclusiones:

“En virtud de lo expuesto, no caben dudas acerca de que el sistema de protección contra el despido vigente en nuestro país acusa en la actualidad una fuerte debilidad que compromete la eficacia de todo el ordenamiento protectorio laboral. En ese contexto se han planteado alternativas de cambio como eliminar el régimen de extinción del contrato con despido “ad nutum”, y la ratificación por nuestro país del Convenio 158 de la OIT, o la implementación de un régimen de estabilidad propia para determinadas actividades, ampliándose de esa manera las dos estabilidades propias del art. 14 bis de la Constitución Nacional: representantes sindicales y empleados públicos. Además, se han alzado voces que creen que el cambio debería basarse en el incremento de las indemnizaciones, y que la tarifa funcione como un piso mínimo acumulable a la reparación por mayores daños que pueda demostrar el trabajador, eliminando cualquier tipo de tope existente, y asimilando las situaciones de despido a lo que fue el caso Vizzoti. Considero que se está generando un consenso acerca de la insuficiente protección de nuestro sistema legal frente al despido arbitrario. No obstante, no hay coincidencias en cuanto a cuál sería el remedio para éste problema. El sistema que se encuentra en crisis (al menos en lo que a mi opinión respecta) rige hace muchos años en nuestro país y se ha enraizado fuertemente en nuestra cultura, razón por la cual es muy difícil proponer cambios. Además, si la propuesta se centra en poner más límites a la facultad de despedir, generará fuertes reclamos en los sectores empresarios. La opinión que he formado al respecto es

que una reforma al régimen de extinción del contrato de trabajo debería tomar como referencia varias aristas como: el despido con invocación de causa, el despido sin causa, el despido por causas económicas, el despido discriminatorio, e incluso el despido indirecto. El mecanismo alternativo que podría reemplazar al vigente y que a continuación expondré tiene como principales metas descongestionar el sistema judicial y por otra parte darle una oportunidad más al trabajador para que evite ser despedido sin posibilidad de defenderse adecuadamente: La propuesta se basa en la existencia de un mecanismo de carácter administrativo previo de propuesta de despido en el que el empleador deba justificar las causales que motivan su decisión antes de despedir al trabajador. Podría tratarse de causales que configuran o no injurias por parte del trabajador y que justifiquen su despido. En cuanto al primero de los casos, se desarrollaría un debate previo donde el empleador podría acompañar evidencias de la causal invocada y argumentar sobre la entidad de la injuria. Ello serviría para evitar que se invoquen causales de despido manifiestamente improcedentes y consecuentemente sería un ámbito en el que se facilite una negociación que evite el proceso judicial. En ésta etapa se le concederá al trabajador a su vez la posibilidad de defensa para el trabajador, que permita tener por acreditada la causa del despido en beneficio de ambas partes. En cuanto al segundo de los casos, esto es la posibilidad de despedir por motivos que no configuren justa causa, pero que llevan al empleador de querer desprenderse del trabajador, aquel debería invocar y justificar las situaciones de transformación o reordenamiento de la empresa que le llevan a prescindir del dependiente. Por ejemplo, los supuestos de poca contracción al trabajo, baja productividad, dificultades del trabajador para adaptarse al clima de trabajo o falta de adecuada formación o capacitación. Las razones de ser de éstos casos tienen que ver con que el anticipo de voluntad de despedir por parte del empleador podría jugar a favor a la preservación del vínculo en tanto y en cuanto se anoticie debidamente al trabajador de las falencias que se le atribuyen y se le otorgue un plazo a los fines de evaluar si puede modificar su comportamiento o satisfacer las

exigencias del cargo. En el mismo sentido podrían incluirse situaciones disciplinarias como por ejemplo un llamado de atención para el trabajador por tener por costumbre llegar tarde, que al ser ventiladas podrían ser útiles para procurar un cambio en la actitud del trabajador o, en todo caso configurar prueba en caso de que tales antecedentes sirvan de precedente para un despido sin causa. Este procedimiento funcionaría de manera idéntica para el supuesto de despido indirecto, imponiéndole al trabajador que denuncia actos lesivos de su interés la posibilidad de una instancia preliminar a fin de procurar la continuidad del contrato y dejar acreditada la causal de denuncia. Adicionalmente, podría establecerse que la extinción del contrato por causal de despido sin justa causa quede perfeccionada con el pago de la indemnización, de manera tal que hasta que la misma no se abone subsistan las obligaciones del empleador en el orden de pago de haberes y contribuciones a la seguridad social. Será pasible de indemnización agravada el hecho de que el empleador eluda los mecanismos legales preliminares y por supuesto perdería la oportunidad de invocar causales de injuria o económicas. Tomando ideas planteadas más arriba, sería trascendental modificar el artículo 245 de la LCT y las normas estatutarias relativas al régimen indemnizatorio por el despido sin justa causa o el indirecto, para que la tarifa funcione como un mínimo asegurado al trabajador, eliminándose cualquier tipo de tope. El procedimiento esbozado resulta ser un sistema superador del sistema indemnizatorio tradicional al proponer soluciones más integrales, reconociendo que la tarifa “pura” no cuenta con sentido eminentemente protectorio si no representa un mínimo garantizado por la ley cuya percepción no libere (sino hasta la concurrencia de lo percibido) de la responsabilidad por el resarcimiento integral en los casos en que la prueba conduzca a la determinación de créditos mayores, sea por tratarse de despidos abusivos o especialmente lesivos o la imposibilidad de obtener empleos análogos, sea por razones étáreas, sanitarias, formativas, de responsabilidades familiares u otras causas similares”.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

(Morón, 2018) presentó una investigación descriptiva, titulada “La protección frente al despido arbitrario del trabajador de confianza en el sector público y privado”, La investigación utilizó una sola variable: protección del trabajador de confianza frente al despido arbitrario. Y concluyo que:

“El trabajador de confianza en el Sector Privado, debe tener la misma protección frente a la voluntad extintiva unilateral del empleador, que un trabajador ordinario, debiéndose procurar su estabilidad laboral relativa, pues los instrumentos legales no validan al retiro de confianza como una causal de extinción de contrato de trabajo, ni tampoco está configurado como una causa justa de despido, al ser una causal subjetiva; por lo que urge efectuar una reforma inmediata que regule claramente la procedencia del despido para esta categoría de trabajadores en el sector privado. En el caso de los trabajadores de confianza del Sector Público, debo indicar que estos trabajadores, por disposición constitucional, no se encuentran comprendidos dentro de la carrera administrativa, motivo por el cual, su estabilidad laboral dependerá del grado de confianza que exista entre este trabajador y el funcionario que lo designó. Considero que la diferencia entre el trabajador de confianza del sector privado, y el del sector público radica en la finalidad de la prestación que brindan, pues mientras que la finalidad de la prestación del trabajador de confianza del sector público está orientado a un fin económico a favor de uno o un grupo de personas que conforman la figura del empleador privado, en el caso del servidor de confianza del Sector Público, su prestación tiene como finalidad el bienestar común, no a favor de un grupo de ciudadanos o de un solo individuo, sino que su prestación va dirigida al interés público, motivo por el cual, si bien se busca incluir las defensas propias del derecho laboral, en contraposición a la postura monista del derecho administrativo en el cual la relación laboral estaba sujeta a la discrecionalidad del estado en su condición de empleador, también es importante diferenciar aquellos cargos públicos de libre designación

que por su propia naturaleza dependen mucho de la confianza subjetiva del funcionario encargado de designarlo.

En Perú (López Reyes J, 2017) en su trabajo de investigación para obtener el título de bachiller se basó sobre “Plazo de Prescripción de la pretensión de reposición frente al despido incausado” llegando a las siguientes conclusiones:

“1. El plazo para plantear la pretensión de reposición frente a un despido incausado regulado en el art.36 del D.S 003-97-TR, debe ser un plazo de prescripción, ya que esta es compatible con la naturaleza constitucional del derecho al trabajo.2. El plazo para plantear la pretensión de reposición frente a un despido incausado regulado en el artículo 36 del D.S 003-97-TR como un plazo de caducidad, NO es compatible con la naturaleza constitucional del derecho al trabajo.3. El plazo para plantear la pretensión de reposición frente a un despido incausado regulado en el art.36 del D.S 003-97-TR, como un plazo de prescripción, SI es compatible con la naturaleza constitucional del derecho al trabajo, por lo que debería aplicarse. 4. El artículo 36 del Decreto Supremo N° 003-97-TR forma parte del contenido constitucional del derecho al trabajo; la reposición (como adecuada protección frente al despido arbitrario) frente a un despido incausado.5. La tutela de Derechos Constitucionales (y su contenido constitucional protegido, como la reposición frente al despido incausado) no debe estar sujeto a plazos de caducidad sino de prescripción. 6. El Tribunal Constitucional ha establecido que cuando una norma contravenga un plazo para solicitar tutela de derechos constitucionales se debe interpretar como prescripción”.

(Ríos, 2018) presentó la investigación exploratoria – descriptiva titulada “Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre indemnización por despido arbitrario, en el expediente N° 03733-2014-0-1801-JR-LA-09, del distrito judicial de Lima - Lima. 2018”. La investigación se realizó utilizando como unidad de análisis el expediente judicial citado, seleccionado mediante muestreo por conveniencia. Los resultados revelaron que, de acuerdo a los parámetros

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes establecidos en el estudio, la parte expositiva considerativa y resolutive, pertenecientes a la sentencia de primera instancia fueron de calidad muy alta, muy alta y muy alta; mientras que, la sentencia de segunda instancia tuvo un rango de: muy alta, muy alta y muy alta. En conclusión, la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia, fueron de rango muy alta y muy alta respectivamente.

(Concha, 2014) en Perú,
investigo:

Análisis de la estabilidad laboral de los trabajadores de confianza según el Tribunal Constitucional, y sus conclusiones fueron: a) La estabilidad laboral es un derecho por el cual se busca la conservación del contrato de trabajo ante las vicisitudes que se presentan en la relación laboral siendo una manifestación del principio de continuidad, el cual junto con el derecho al trabajo en sus dos manifestaciones, la de acceder a un puesto de trabajo y la de conservar este empleo, son los fundamentos jurídicos de la estabilidad laboral, y es principalmente en esta segunda manifestación que se cimienta la estabilidad laboral, ya que el trabajador no puede ser despedido sino por causa justa. b) El tipo de estabilidad que se encuentra regulado en el Perú es el de la estabilidad laboral relativa impropia, en este sistema la protección contra el despido arbitrario del trabajador es la indemnización, Teniendo su excepción en el despido nulo (estabilidad laboral absoluta). Sin embargo, los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional han ampliado los supuestos de reposición, y por ende los casos de estabilidad laboral absoluta. c) Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el despido como forma de extinción de la relación laboral por voluntad unilateral del empleador debe tener una naturaleza causal y para tener una causa justa debe de estar relacionado con la conducta o capacidad del trabajador. (p. s/n)

2.1.3. Antecedentes Locales

En Sullana, se llevó al Tribunal Constitucional el recurso de Agravio

Constitucional interpuesto por don Eloy Granda Urbina contra la sentencia de fojas 37, de fecha 22 de mayo de 2014, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que declaró improcedente la demanda de autos. Esta demanda fue interpuesta en contra de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana—Agencia Talara. Solicita que se declare inaplicable la Carta 1662-2013-GESTION DE RRHH/CMAC-S, que dispone dar por concluida su relación laboral sin motivo alguno, transgrediendo de esa forma su derecho al trabajo, al debido proceso y a la protección contra el despido arbitrario.

En consecuencia, pide se ordene a la emplazada a reponerlo en el mismo cargo, misma función y mismo sueldo. Asimismo, solicita el reconocimiento del cómputo del tiempo de servicios para efectos pensionables durante el tiempo que permanezca destituido. La decisión arribada por el Tribunal Constitucional fue Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos invocados.

En Piura (Acha Peña, 2016) investigo para la realización de su tesis titulada: Calidad de Sentencias de Primera y Segunda Instancia Sobre Nulidad de Despido Incausado Y Consiguiente Reposición de Empleo, en el expediente N° 03165-2012-0-2001- JR-LA-01, Del Distrito Judicial De Piura-Piura. 2016. En la cual concluyo que respecto a la sentencia de primera instancia determinó que su calidad fue de rango muy alta, conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio y respecto a la segunda instancia determinó que su calidad fue de rango muy alta, conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Procesales relacionados con las

2.2.1.1. La jurisdicción

2.2.1.1.1. Conceptos

2.2.1.1. La jurisdicción

2.2.1.1.1. Conceptos

Bautista, (Citado por Jara, 2019)

La palabra jurisdicción proviene del latín iurisdictio, que se forma de la locución ius dicere, la cual literalmente significa —decir o indicar el derecho—. La jurisdicción es la actividad con que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, interviniendo por requerimiento de los particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, se sustituye a ellos en la actuación de la norma que tutela aquellos intereses, declarando el lugar de ello si existe cuál es la tutela que una norma concede a un determinado interés, imponiendo al obligado, en lugar del derechohabiente, la observación de la norma, y realizando mediante el uso de sus fuerza coactiva en vez del derechohabiente, directamente aquellos intereses cuya tutela legalmente se ha declarado cierta. (p. 13)

Casal, (2006)

Como advierte de la Sala Constitucional en la sentencia 1571/2001 lo que hizo fue ordenar y relacionar ciertos argumentos que había estado expresando desde sus primeras decisiones, si bien precisa algunas ideas sobre el alcance y justificación de la jurisdicción normativa. (p. 221)

2.2.1.1.2. Elementos de la jurisdicción

2.2.1.1.3. Principios constitucionales aplicables a la función jurisdiccional

Según Bautista, (2006) los principios son como directivas dentro de las cuales se desarrollan las instituciones del Proceso.

2.2.1.1.3.1. Principio de Unidad y Exclusividad

Chanamé, (2009) “Resolución plena del asunto confiado a su competencia, sin que puedan separarse elementos de la Litis (incidentes, cuestiones previas o prejudiciales, por ejemplo) para confiarlos a otro centro decisorio distinto. Inexistencia de especies de delito o personas calificadas sustraibles a su jurisdicción”. (p. s/n)

Un Juez debe ser responsable, porque su actuación tiene niveles de responsabilidad y, si actúa arbitrariamente pueden sobrevenirle responsabilidades penales, civiles y aún administrativas. El freno a la libertad es la responsabilidad, de ahí que existan denuncias por responsabilidad funcional de los jueces. Asimismo, el Juez será competente en la medida que ejerce la función jurisdiccional en la forma establecida en la Constitución y las

leyes, de acuerdo a las reglas de la competencia y lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. (Huarhua, 2017 p. 31)

2.2.1.1.3.2. Principio de Independencia Jurisdiccional

Chaname, (2009) expone: La función jurisdiccional es independiente que: “Estando en trámite un proceso judicial, ninguna autoridad u organismo puede avocarse a sus conocimientos, ni interferir en el ejercicio de la función. En lo concerniente a la prohibición que pesa sobre toda autoridad para modificar sentencias judiciales o retardar su ejecución”. (p. s/n)

“No obstante, funciona como excepción el derecho de gracia con la modalidad del Indulto o amnistía. Por su parte el derecho de investigación del Congreso queda a salvo, pero sin interferir los procedimientos judiciales, ni dictar disposiciones de naturaleza jurisdiccional”. (Huarhua, 2017 p. 32)

2.2.1.1.3.3. Principio de la Observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Según refiere Cubas Villanueva (2008), nuestra doctrina acepta que el debido proceso legal, es la institución del derecho Constitucional procesal que identifica a los principios y presupuestos procesales mínimos que deben reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de un resultado, este se encuentra conformado por todas las garantías que estén en concordancia con el fin de dotar a una causa penal de los mecanismos que protejan a la persona sometida a ella.

2.2.1.1.3.4. Principio de Motivación escrita de las resoluciones judiciales

Monroy, (2007)

Explica que antes los jueces no estaban obligados a fundamentar sus decisiones, dejándose llevar únicamente por su intuición de lo considerado justo. Sin embargo, en la actualidad, debido a los logros del constitucionalismo moderno, se exige al juez fundamentar cada una de sus decisiones, salvo aquellas que son del tránsito procesal. Agrega que esta exigencia de la fundamentación también será realizada por las partes cuando hagan uso de los medios impugnatorios.

Monroy, (2007) *“este principio evita arbitrariedades, así como también posibilita a las partes a fundamentar mejor sus razones en el caso impugne la decisión judicial, elevándola a una segunda instancia”*. (p. s/n)

2.2.1.1.3.6. Principio de la Pluralidad de la Instancia

Bautista, (2007)

Aclara que se detalla como pluralidad de la instancia porque no siempre puede ser de doble instancia, sino triple. Asimismo, este principio se justifica porque las personas no vean resuelta sus expectativas con la decisión judicial que pone fin al proceso, por lo que en estos casos quedará habilitada la vía plural.

2.2.1.1.3.7. Principio de Economía Procesal.

Consiste en procurar la obtención de mayores resultados con el empleo de la actividad procesal que sea necesaria. Está referido al ahorro de tiempo, gastos y esfuerzos.

2.2.1.2. La Competencia

2.2.1.2.1. Conceptos

Flores, (s.f.)

“La competencia es la facultad atribuida a cada tribunal o juzgado para conocer, tramitar y decidir valida legal y constitucionalmente, de un determinado asunto que le pertenece, en virtud de la potestad que le confiere el poder público. Es la capacidad otorgada a los jueces por la ley para conocer en causas determinadas según la materia, grado, valor o territorio”. (p. s/n)

Bautista, (2007)

La competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Por lo tanto, el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no la puede ejercer en cualquier tipo de litigios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por ley; es decir, en aquellos en los que es competente. (p. s/n)

2.2.1.2.2. Fundamentos de la competencia

Peña, (s.f.)

En consecuencia, el fundamento de las distintas competencias, se encuentra en

la aspiración de obtener una mejor, rápida, económica y cumplida administración de justicia y, desde luego, una mayor capacidad técnica de los jueces que la administran. De esa manera -señala Levene- La competencia territorial evita que el juez y las partes tengan que trasladarse a largas distancias; la competencia por razón de la materia permite la división del trabajo y resuelve el problema de la complejidad cada vez mayor del orden jurídico; los asuntos más graves son resueltos por jueces más idóneos, se economiza energía funcional y gastos, etc. (p. Pág.)

2.2.1.2.3. Determinación de la competencia en el caso concreto

“En el caso en estudio, se trata de un proceso de divorcio por la causal, la competencia corresponde a un Juzgado de Familia, así lo establece: El Art. 53° de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) inciso a donde se lee: Los juzgados de familia conocen en materia civil: las pretensiones relativas a las disposiciones generales del Derecho de Familia y a la sociedad conyugal, contenidas en las Secciones Primera y Segunda del Libro III del Código Civil y en el Capítulo X del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes. Asimismo, el Art. 24° inciso 2 del Código Procesal Civil, establece la Competencia Facultativa, y textualmente indica; Además del juez del Domicilio del Demandado, también es competente, a elección del demandante: El Juez del último domicilio conyugal, tratándose de nulidad de matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, separación de cuerpos, divorcio y patria potestad. Lo que significa que en materia de divorcio será competente un Juzgado de Familia específicamente, el Juzgado de Familia situado en el último domicilio conyugal y si ahí existen varios el que esté de turno cuando se interponga la demanda”.

“Lo expuesto implica que, en materia de divorcio para los efectos de determinar la competencia no solo debe tomarse en cuenta la especialidad del órgano jurisdiccional, la naturaleza de la pretensión; sino también la competencia en función a lo expuesto en el Código Procesal Civil, de manera especial, esto es que hay que litigar en el último domicilio conyugal que correspondió a los cónyuges”.

En el caso concreto, los órganos jurisdiccionales competentes fueron:

1. En primera instancia, intervino Juzgado de Familia Transitorio de Sullana.

3.2.1.2.4. Determinación de la competencia en el proceso en estudio

En el caso en estudio, que se trata de Pago de beneficios sociales, la competencia corresponde a un Juzgado civil, así lo establece la nueva ley procesal de Trabajo Ley 29497

2.2.1.3. El proceso

2.2.1.3.1. Conceptos

El proceso judicial se dirige a una serie de pasos o procedimientos a fin de resolver una controversia, cada procedimiento puede dar origen a un procedimiento distinto que el original, por ello se dice que el proceso puede envolver varios procedimientos para resolver un litigio.

2.2.1.4. El proceso como garantía constitucional

Según Couture (2002)

El proceso en sí, es un instrumento de tutela de derecho (...); y se realiza por imperio de las disposiciones constitucionales (...). Está consagrada en la mayoría de las constituciones del siglo XX, con muy escasas excepciones, que una proclamación programática de principios de derecho procesal es necesaria, en el conjunto de los derechos de la persona humana y de las garantías a que ella se hace acreedora.

Estos preceptos constitucionales han llegado hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, formulada por la Asamblea de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 cuyos textos pertinentes se citan a continuación:

“Art. 8°. Toda persona tiene derecho a un recurso ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley”. (p. s/n)

2.2.1.5. El debido proceso formal

2.2.5.1. Conceptos

El derecho al debido proceso está concebido como garantía aseguradora de los demás derechos fundamentales, connatural a la (en palabras de Marlaux) Condición Humana,

y no sólo un principio o atribución de quienes ejercen la función jurisdiccional. De esta manera el debido proceso poseería dos dimensiones: uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto referido a los estándares de justicia o razonabilidad y el otro referido a la dinámica procedimental.

2.2.1.5.2. Elementos del debido proceso

Siguiendo a Ticona (1994), el debido proceso corresponde al proceso jurisdiccional en general y particularmente al proceso penal, al proceso civil, al proceso agrario, al proceso laboral, inclusive al proceso administrativo; y aún, cuando no existe criterios uniformes respecto de los elementos, las posiciones convergen en indicar que para que un proceso sea calificado como debido se requiere que éste, proporcione al individuo la razonable posibilidad de exponer razones en su defensa, probar esas razones y esperar una sentencia fundada en derecho. Para ello es esencial que la persona sea debidamente notificada al inicio de alguna pretensión que afecte la esfera de sus intereses jurídicos, por lo que resulta trascendente que exista un sistema de notificaciones que satisfaga dicho requisito.

En el presente trabajo los elementos del debido proceso formal a considerar son:

1. Intervención de un Juez independiente, responsable y competente.

Porque, todas las libertades serían inútiles sino se les puede reivindicar y defender en proceso; si el individuo no encuentra ante sí jueces independientes, responsables y capaces.

Un Juez será independiente cuando actúa al margen de cualquier influencia o intromisión y aún la presión de los poderes públicos o de grupos o individuos.

Un Juez debe ser responsable, porque su actuación tiene niveles de responsabilidad y, si actúa arbitrariamente puede, sobrevenirle responsabilidades penales, civiles y aún administrativas. El freno a la libertad es la responsabilidad, de ahí que existan denuncias por responsabilidad funcional de los jueces.

Asimismo, el Juez será competente en la medida que ejerce la función jurisdiccional en la forma establecida en la Constitución y las leyes, de acuerdo a las reglas de la competencia y lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el Perú está reconocido en La Constitución Política del Perú, numeral 139 inciso 2 que se ocupa de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional (Gaceta Jurídica, 2005)

2. Emplazamiento válido

Al respecto, tanto Ticona (1999), así como se expone en La Constitución Comentada de la Gaceta Jurídica (2005), el sistema legal, especialmente, la norma procesal que está comprendida en este sistema debe asegurar que los justiciables tomen conocimiento de su causa.

En este orden, las notificaciones en cualquiera de sus formas indicadas en la ley, deben permitir el ejercicio del derecho a la defensa, la omisión de estos parámetros implica la nulidad del acto procesal, que necesariamente el Juez debe declarar a efectos de salvaguardar la validez del proceso.

3. Derecho a ser oído o derecho a audiencia

La garantía no concluye con un emplazamiento válido; es decir no es suficiente comunicar a los justiciables que están comprendidos en una causa; sino que además posibilitarles un mínimo de oportunidades de ser escuchados. Que los Jueces tomen conocimiento de sus razones, que lo expongan ante ellos, sea por medio escrito o verbal.

En síntesis nadie podrá ser condenado sin ser previamente escuchado o por lo menos sin haberse dado la posibilidad concreta y objetiva de exponer sus razones.

4. Derecho a tener oportunidad probatoria

Porque los medios probatorios producen convicción judicial y determinan el contenido de la sentencia; de modo que privar de este derecho a un justiciable implica afectar el debido proceso.

En relación a las pruebas las normas procesales regulan la oportunidad y la idoneidad de los medios probatorios. El criterio fundamental es que toda prueba sirva para esclarecer los hechos en discusión y permitan formar convicción, conducentes a obtener una sentencia justa.

5. Derecho a la defensa y asistencia de letrado

Este es un derecho que en opinión de Monroy, citado en la Gaceta Jurídica (2005), también forma parte del debido proceso; es decir la asistencia y defensa por un letrado, el derecho a ser informado de la acusación o pretensión formulada, el uso del propio idioma, la publicidad del proceso, su duración razonable entre otros.

Esta descripción concuerda con la prescripción del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil: que establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, pero en todo caso con sujeción a un debido proceso (Cajas, 2011).

6. Derecho a que se dicte una resolución fundada en derecho, motivada, razonable y congruente

Esta prevista en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; que establece como Principio y Derecho de la Función Jurisdiccional: la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

De esta descripción se infiere, que el Poder Judicial en relación a sus —pares‖ el legislativo y el ejecutivo, es el único órgano al que se le exige motivar sus actos. Esto implica que los jueces serán todo lo independiente que deben ser, pero están sometidos a la Constitución y la ley.

La sentencia, entonces, exige ser motivada, debe contener un juicio o valoración, donde el Juez exponga las razones y fundamentos fácticos y jurídicos conforme a los cuales decide la controversia. La carencia de motivación implica un exceso de las facultades del juzgador, un arbitrio o abuso de poder.

7. Derecho a la instancia plural y control Constitucional del proceso

La pluralidad de instancia consiste en la intervención de un órgano revisor, que no es para toda clase de resoluciones (decretos, autos o sentencia), sino que la doble instancia es para que el proceso (para la sentencia y algunos autos), pueda recorrer hasta dos instancias, mediante el recurso de apelación. Su ejercicio está regulada en las normas procesales. (La casación, no produce tercera instancia) (Ticona, 1999; Gaceta Jurídica, 2005).

2.2.1.6. El proceso laboral

Se entiende por proceso laboral a los concebidos para resolver litigios en que se invocan reglas y normas relativas al trabajo dependiente, como un conjunto de actos procesales que se desarrollan en forma progresiva, sistemática y teleológicamente con el objeto de resolver un conflicto laboral.

El hecho de que existan semejanzas en el procedimiento de determinados actos de procesos civil y laboral, no puede llevarnos a concluir que ambos tienen la misma esencia.

Los procedimientos en el proceso civil y laboral pueden ser semejantes y hasta iguales, pero los criterios para resolver los conflictos que se presentan en esos ámbitos, jamás serán idénticos.

2.2.1.7. El proceso ordinario laboral

El proceso abreviado laboral, constituye uno de los procesos más célere en relación al proceso ordinario laboral, tanto porque los plazos son más cortos, sino también por el hecho de hacer efectivo el principio de concentración, como por ejemplo, al disponer

que en la Audiencia Única se concentre la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento, y a su vez las dos etapas de esta última, la etapa de confrontación de posiciones y la actuación probatoria, además de los alegatos y la sentencia.

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, hace expresa referencia al proceso abreviado laboral en el artículo 1º, al fijar la competencia de los Juzgados de Paz Letrados Laborales, señalando que corresponde a estos juzgados el conocimiento de los siguientes procesos:

- “(...) las pretensiones relativas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP)”.
- “Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP)”, exceptuando de la cuantía, los casos en que se trate “de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador”.
- “Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía”.

El legislador, al regular la competencia por materia, en el artículo 2º, numerales 2 y 3 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ha considerado, dos casos en los que debe utilizarse el proceso abreviado laboral, cuya competencia corresponde a los Juzgados Especializados de Trabajo:

- a) “(...) de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única”; y
- b) “(...) las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical”.

2.2.1.8. El pago de beneficios sociales

Son percepciones que se entregan al trabajador para promover un mayor bienestar a él y a su familia, no se retribuye directamente la prestación del servicio, pueden provenir de la ley, convenios colectivos, contrato de trabajo o decisión unilateral del empleador.

Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo

2.2.1.9. Los puntos controvertidos en el proceso

2.2.1.9.1. Nociones

Dentro del marco normativo del artículo 471 del Código de Procesal Civil los puntos controvertidos en el proceso pueden ser conceptuados como los supuestos de hecho sustanciales de la pretensión procesal contenidos en la demanda y que entran en conflicto o controversia con los hechos sustanciales de la pretensión procesal resistida de la contestación de la demanda, (Coaguilla, p. s/f).

2.2.1.9.2. Los puntos controvertidos en el proceso judicial en estudio

- 1) Determinar la verdadera naturaleza de los contratos celebrados entre el actor y la entidad demandada.
- 2) Determinar si le corresponde el pago de beneficios sociales: Compensación por tiempo de Servicios, Vacaciones y Gratificaciones por el periodo comprendido desde 03.09.2012 hasta el 23.03.2015. Además de pago de remuneraciones correspondiente, pago de asignación familiar, pago de horas extras y pago por trabajo en domingos y feriados.

2.2.1.10. La prueba

Zumaeta, (2008) “técnicamente, el medio probatorio es la manifestación formal del hecho a probar; es la descripción, designación o representación mental de un hecho”. (p. s/n)

Los medios de prueba según Meneses (citado por Huarhwa, 2017) son los elementos que sirven para cumplir los fines procesales de la prueba judicial en el marco de un debido proceso legal; son las personas y cosas que poseen información útil sobre hechos, y que la ley considera idóneas para el desarrollo de la actividad de prueba y la producción del resultado probatorio en un juicio; son los datos empíricos que sirven para comprobar las hipótesis fácticas planteadas por las partes en una causa. (p. 73)

2.2.1.10.1. En sentido común.

Couture, (2002) “En su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar;

es decir demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Dicho de otra manera, es una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición”. (p. s/n)

2.2.1.10.2. En sentido jurídico procesal.

Hernández, (2008)

“En la técnica procesal la palabra prueba tiene otras acepciones; se la usa a veces para designar los distintos medios o elementos del juicio ofrecidos por las partes o recogidos por el Juez en el curso de la instrucción; se habla así de prueba testimonial, instrumental, inspección ocular, etc. Otras veces se la refiere a la acción de probar y se dice entonces que el acto corresponde a la prueba de su demanda y al demandado de sus defensas. También designa el estado de espíritu producido por el Juez por los medios aportados y en este sentido un hecho se considera o no probado según que los elementos de juicio sean o no considerados suficientes para formar la convicción de aquél, pues las partes pueden haber producido en los autos abundante prueba sin lograr producir con ella esa convicción”. (p. s/n)

2.2.1.10.3. Concepto de prueba para el Juez.

Según Rodríguez, (1995) “al Juez no le interesan los medios probatorios como objetos; sino la conclusión a que pueda llegar con la actuación de ellos: si han cumplido o no con su objetivo; para él los medios probatorios deben estar en relación con la pretensión y con el titular del objeto o hecho controvertido”. (p. s/n)

2.2.1.10.4. El objeto de la prueba.

Hernández, (2008) “Objeto de la prueba son los hechos que se alegan como fundamento del derecho que se pretende; los hechos son todos los acontecimientos susceptibles de producir la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. No hay derecho que no provenga de un hecho, precisamente de la variedad de hechos procede la variedad de derechos”. (p. s/n)

2.2.1.10.5. El principio de la carga de la prueba.

En el marco normativo, este principio se encuentra prevista en el Art. 196 del Código Procesal Civil, en el cual se indica: “Salvo disposición legal diferente, la carga de

probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos” (Cajas, 2016).

En el marco normativo, este principio se encuentra prevista en el Art. 196 del Código Procesal Civil, en el cual se indica: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos” (Cajas, 2011).

En virtud de este principio, los hechos corresponden ser probados por quien afirma.

2.2.1.10.6. Valoración y apreciación de la prueba.

Siguiendo a Rodríguez (2005), encontramos:

A. Sistemas de valoración de la prueba. Existen varios sistemas, en el presente trabajo solo se analiza dos:

a. El sistema de la tarifa legal

Rodríguez, (1995)

“En este sistema la ley establece el valor de cada medio de prueba actuado en el proceso. El Juez admite las pruebas legales ofrecidas, dispone su actuación y las toma con el valor que la ley le da cada una de ellas en relación con los hechos cuya verdad se pretende demostrar. Su labor se reduce a una recepción y calificación de la prueba mediante un patrón legal. Por este sistema el valor de la prueba no lo da el Juez, sino la ley”. (p. s/n)

En opinión de Taruffo, (2002) “la prueba legal consiste en la producción de reglas que predeterminan, de forma general y abstracta, el valor que debe atribuirse a cada tipo de prueba”. (p. s/n)

b. El sistema de valoración judicial

Satta (1971), respecto a la valoración de la prueba, manifiesta que según el cual el magistrado debe valorar las pruebas acordes a su sensata apreciación entendido el principio consagrado del llamado libre convencimiento del juez. (pág. 189)

Asimismo, Gozaíni, citado por Rioja (2209), precisa que, por apreciación (darle un precio) o valoración (determinar un ajuste cuántico) de la prueba, se entiende el

proceso por el cual el Juez califica el mérito a cada medida probatoria explicando en la sentencia el grado de convencimiento que ellas le han aportado para resolver la causa. (pág. 377)

Según Taruffo, (2002) “De la prueba libre o de la libre convicción, como le denomina, supone ausencia de reglas e implica que la eficacia de cada prueba para la determinación del hecho sea establecida caso a caso, siguiendo los criterios no predeterminados, sino discrecionales y flexibles, basados en los presupuestos de la razón”. (p. s/n)

B. Operaciones mentales en la valoración de la prueba.

a. El conocimiento en la valoración y apreciación de los medios de prueba:

“El conocimiento y la preparación del Juez es necesario para captar el valor de un medio probatorio, sea objeto o cosa, ofrecido como prueba. Sin el conocimiento previo no se llegaría a la esencia del medio de prueba”. (Huarhua, 2017 p. 80)

b. La apreciación razonada del Juez:

“El Juez aplica la apreciación razonada cuando analiza los medios probatorios para valorarlos, con las facultades que le otorga la ley y en base a la doctrina. El razonamiento debe responder no sólo a un orden lógico de carácter formal, sino también a la aplicación de sus conocimientos psicológicos, sociológicos y científicos, porque apreciará tanto documentos, objetos y personas (partes, testigos) y peritos”. (Huarhua, 2017 p. 80)

c. La imaginación y otros conocimientos científicos en la valoración de las pruebas.

“Como quiera que los hechos se vinculan con la vida de los seres humanos, raro será el proceso en que para calificar definitivamente el Juez no deba recurrir a conocimientos psicológicos y sociológicos; las operaciones psicológicas son importantes en el examen del testimonio, la confesión, el dictamen de peritos, los documentos, etc. Por eso es imposible prescindir en la tarea de valorar la prueba judicial”. (Huarhua, 2017 p. 80)

d. Las pruebas y la sentencia

De acuerdo al Código Procesal Civil, la finalidad está prevista en el numeral 188 cuyo texto es como sigue:

“Los medios de prueba tienen como fin acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos, y fundamentar sus decisiones”. (Cajas, 2011, p. 622).

Art. 191 del mismo Código Procesal Civil, cuyo texto es:

“Todos los medios de prueba, así como sus sucedáneos, aunque no estén tipificados en este Código, son idóneos para lograr su finalidad prevista en el artículo 188.

Los sucedáneos de los medios probatorios complementan la obtención de la finalidad de éstos” (Cajas, 2011, p. 623).

Taruffo, (citado por Huarhua, 2017) expone “la prueba sirve para establecer la verdad de uno o más hechos relevantes para la decisión (...). Precisa que un dato común y recurrente en las diversas culturas jurídicas, el objeto de la prueba o su finalidad fundamental es el hecho, en el sentido de que es lo que es probado en el proceso” (p. 81).

Colomer, (2003) En cuanto a la fiabilidad, se puede acotar lo que expone

“Expone que en cuanto a la fiabilidad, se puede acotar (...) en primer lugar el Juez examina la fiabilidad de cada medio de prueba empleado en la reconstrucción de los hechos que ha de juzgar, es decir el punto de partida del razonamiento judicial en el examen probatorio consiste en establecer si la prueba practicada en la causa puede ser considerada una posible fuente de conocimiento de los hechos de la causa (...), el juzgador debe analizar y verificar la concurrencia de todos los requisitos formales y materiales que los medios de prueba deben tener para ser válidos mecanismos de transmisión de un concreto hecho (...) no acaba en la verificación, sino que también requiere la aplicación de la correspondiente máxima de la experiencia al concreto medio probatorio, para que de este modo el juez pueda alcanzar una opinión sobre la capacidad de dicho medio para dar a conocer un concreto hecho (...) la fiabilidad no se aplica para verificar la veracidad del hecho que se pretenda probar, sino que se trata de un juicio sobre la posibilidad de usar un concreto medio de prueba como instrumento para acreditar un hecho determinado”. (p.

s/n)

2.2.1.10.7. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio

2.2.1.10.7.1. Documentos

A. Definición

Se entiende por documentos, *“escritura, papel o documento con que se justifica o prueba alguna cosa”*. Es en general todo escrito o medio en que se consigna un hecho. La ley utiliza diversas expresiones, como *“documentos”* (artículo 309 del Código Civil), *“título”* (artículo 1901 del Código Civil), etc., todas las que debemos entender referidas a los instrumentos.

Podríamos referirnos a dos: en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, documento sería cualquier elemento representativo de una realidad que pretende ser acreditada. Sería tanto una carta o acta notarial como una cinta de video, par de botas, rollo de película. El único límite es que se trate de un objeto susceptible de ser desplazado ante el órgano jurisdiccional. En sentido estricto sería todo soporte que contiene la expresión escrita de un pensamiento. Ésta es una concepción un poco simplista y restringida. La prueba documental en el proceso civil lo es todo.

La **prueba documental** es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información que consta en documentos o escritos puede ser valorada por un juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho.

B. Clases de documentos

a) Instrumentos (documentos) públicos o auténticos e instrumentos (documentos) privados.

Los instrumentos públicos son los autorizados con las solemnidades legales por el competente funcionario (artículo 1699, 1º del Código Civil).

Los instrumentos privados son todos los demás, es decir, los otorgados por cualquier persona y que no son autorizados por un funcionario público competente.

C. Documentos actuados en el proceso

1. Comprobantes de pago correspondientes a los meses de febrero y marzo del 2010
2. Informes N° 125-2011/GRP-401000-401300-401320; N° 024-2011/GRP-401000-401300-401320-WRC; N° 064-2011/GRP-401000-401300-401340; N° 1280-2011/GRP-401000-401400-401420 de folios 27 a 29 y 33 respectivamente, donde se demuestra que efectivamente el actor ha prestado servicios en la modalidad de locación.
3. Revisorio de planillas glosado a folios 98, donde el revisor de planillas adscrito a los juzgados civiles de Sullana señala que el demandante laboró desde noviembre del 2009 hasta marzo del 2010

2.2.1.11. La Sentencia

2.2.1.11.1. Definiciones

Del Rosario (2005) refiere que *“la sentencia es el acto procesal mediante el cual el juez pone fin a la instancia, que viene a ser el proceso, y resuelve con esto el conflicto de intereses entre las partes”* (p. s/n).

Romero, (1997)

Amplía diciendo que se lo debe hacer en un doble aspecto: como acto jurídico procesal y como documento en el cual aparece el mismo. Explica que es un acto jurídico porque emana de los magistrados para decidir las controversias sometidas a él mismo y, que es un documento, porque contiene la decisión escrita que fue emitida.

Con referencia a la sentencia Océano, (s.f.) “afirma que la sentencia es el acto procesal emitido por el órgano jurisdiccional, que pone fin al proceso, pero que puede tener carácter provisional hasta que se dicte otra sentencia definitiva”. (p. s/n)

2.2.1.11.2. Estructura contenido de la sentencia.

2.2.1.11.2.1. En el ámbito de la doctrina

Del Rosario, (2005) afirma:

Que una sentencia debe contener: 1. La exposición de los argumentos expresados por las partes. 2. Las consideraciones, debidamente numeradas, a las que llegue el juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento. 3. El pronunciamiento sobre la demanda, señalando en caso la declare fundado total o parcialmente y 4. La condena o exoneración de costas y costos. (p. s/n)

2.2.1.11.2.3. En el ámbito de la Jurisprudencia

En la jurisprudencia principalmente se centran en la motivación de las sentencias las cuales deben precisar los fundamentos de hecho y de derecho, como en las siguientes:

“... Para asegurar el adecuado control sobre la función decisoria y evitar arbitrariedades, la ley impone a los jueces el deber de enunciar los motivos de hecho y de derecho en que se basa la solución acordada a las cuestiones que se debatieron en el proceso, constituyendo un único medio para verificar las decisiones judiciales (Cas N° 3028-2001- Chinchipe, 01-10-2002)”. (Código Civil, 2013, p 497).

“La motivación de las resoluciones debe ser clara y precisa respecto a lo resuelto, y uno de los requisitos esenciales para la validez de una resolución, especialmente la final, es que se encuentre debidamente motivada, invocándose los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, evaluando la prueba actuada en el proceso, cuya omisión de estos requisitos determinan la nulidad del fallo (Cas N° 3938-2001- Lima, 31-07-2002)”. (Código Civil, 2013, p. 497); y,

“La motivación de la sentencia es una garantía constitucional que posee todo justiciable y que permite tener pleno y absoluto conocimiento de las razones que justifican la decisión adoptada por los magistrados (Cas N° 2624-2001- Canchas - Sicuani, 02-05-2002)”. (Código Civil, 2013, p 497).

2.2.1.11.3. La motivación de la sentencia

2.2.1.11.3.1. La motivación como justificación de la decisión, como actividad y

como producto o discurso

Fronidzi, (1994) *“Señala que la fundamentación es la justificación escrita de lo que dispone la sentencia de manera detallada, a través de la cual el juez argumenta su ajuste a derecho de la decisión tomada”*. (p. s/n)

Couture, (1948) define *“La fundamentación como un conjunto de fundamentos, motivos o razones que son de hecho y principalmente de derecho, en los cuales se respalda una decisión judicial”*. (p. s/n)

2.2.1.11.3.2. La obligación de motivar

González, (2006) *“la fundamentación más que por evitar un capricho, se lo debe hacer por ser una obligatoriedad constitucional, que da pie, cuando no se la hace, a una crítica perjudicial contra los jueces y el sistema, así como la indefensión para acudir a instancias superiores, por no tener en claro las razones del fallo”*. (p. s/n)

Romo (2008) acotando que para que una sentencia se considere fundada debe tener de manera integrada tres características:

- a. que resuelva sobre el fondo;
- b. que sea motivada; y
- c. que sea congruente.

2.2.1.11.4. Principios relevantes en el contenido de la sentencia

2.2.1.11.4.1. El principio de congruencia procesal

Peñaranda, (2010) enuncia *“que consiste en la concordancia que debe haber entre lo que formulan las partes en la demanda y la contestación de la demanda, y la decisión final que el juez tome sobre lo formulado, de acuerdo a su criterio, en consideración de lo expuesto, lo probado y lo normado”*. (p. s/n)

Monroy, (2007) explica *“este principio como la obligatoriedad de ajustarse a la declaración de voluntad del pretensor o demandante y no concederle más de lo que*

éste pidió; no obstante, este principio lo limita a otorgarle menos de lo solicitado”. (p. s/n)

2.2.1.11.4.2. El principio de la motivación de las resoluciones judiciales

El inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política prescribe que toda resolución judicial debe tener una motivación necesariamente escrita, ya sea en cualquiera de sus instancias.

Bautista, (2007) diciendo *“que el deber de motivar las decisiones judiciales, la cual consiste en enunciar los motivos o fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la solución determinada, será una forma de controlar la función decisoria de los jueces, evitando arbitrariedades de los mismos”.* (p. s/n)

2.2.1.12. Los Medios Impugnatorios.

2.2.1.12.1. Definiciones

Del Rosario, (2005) “El medio impugnatorio es un acto que consiste en objetar, rebatir, contradecir o refutar cualquier naturaleza de cualquiera de los sujetos del proceso, ya sea la otra parte, el tercero legitimado o el mismo juez. Agrega que a través de estos medios se solicita que se anule o revoque un acto procesal, aduciéndose vicio o error”. (p. s/n)

En otra producción, lo define como el acto procesal por el que las partes solicitan se reforme o anule de manera total o parcial aquella resolución que lo perjudica o agravia. En esta oportunidad, incluso lo relaciona con el principio de pluralidad o el de doble instancia del inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. (Del Rosario, 2009)

2.2.1.12.3. Clases de medios impugnatorios en el proceso civil

A. El recurso de reposición

(Huarhua, 2017 p. 124)

“Previsto en el numeral 362 del CPC, en el cual se contempla que este medio procede

contra los decretos emitidos en los procesos”.(Jara Ruiz, 2019, p. 85)

B. El recurso de apelación

Cajas, (2011).

“Es un medio impugnatorio que se formula ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución recurrida: auto o sentencia. De acuerdo con la norma del artículo 364 del Código Procesal Civil tiene por objeto, que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. Es una garantía constitucional prevista en el artículo 139 inciso 6 como uno de los Principios y Derechos de la función jurisdiccional, mediante el cual se materializa el derecho a la doble instancia”.
(p. s/n)

C. El recurso de casación

“De acuerdo a la norma del artículo 384 del Código Procesal Civil, es un medio impugnatorio mediante el cual las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Persigue la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la Justicia. La regulación completa de la institución jurídica en mención como: tipo de resoluciones contra los cuales se interpone, causales, requisitos de forma, requisitos de fondo y otros están previstos en las normas de los artículos 385 a 400 del Código Procesal Civil”.
(Cajas, 2011).

D. El recurso de queja

Cajas, (2011) “Que se formula cuando hay denegatoria de otros recursos, o cuando se concede pero no en la forma solicitada. Por ejemplo, debiendo ser con efecto suspensivo, tan solo se concede en un solo efecto, se halla regulada en las normas del artículo 401 a 405 de la norma procesal citada”. (p. s/n)

2.2.1.12.3. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio

De acuerdo al proceso judicial existente en el expediente referido, el órgano jurisdiccional de primera instancia declaró **FUNDADA EN PARTE** la demanda de Pago de beneficios sociales, interpuesta por **A** contra **B y C**.

Esta decisión, fue notificada a ambas partes del proceso, siendo apelada por la demandada lo que motivó la expedición de una sentencia de segunda instancia, donde se resolvió Confirmar la sentencia de primera instancia.

2.2.2. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Sustantivas relacionados con el proceso judicial

2.2.2.1. Identificación de la pretensión resulta en la sentencia

Conforme a lo expuesto en la sentencia la pretensión, respecto al cual se pronunciaron en ambas sentencias fue: Pago de beneficios sociales (Expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01) del Primer Juzgado Civil de Sullana, y luego apelada por lo que se elevó a la Sala Civil de Sullana.

2.2.2.2. Desarrollo de instituciones jurídicas previas, para abordar el Pago de beneficios sociales

Según Marcelo (2019):

2.2.2.2.1. Beneficios Sociales

2.2.2.2.1.1. Conceptos

Los beneficios sociales, son todas aquellas ventajas patrimoniales, adicionales a la remuneración básica recibida por el trabajador en su condición de tal, no importa su carácter remunerativo, el monto o la periodicidad del pago, lo relevante es lo que percibe el trabajador por su condición y por mandato legal. Son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores con ocasión de sus labores prestadas de manera dependiente, son los ingresos laborales que el trabajador recibe como consecuencia de su actividad, sin considerar su origen, el importe o la periodicidad del pago o su naturaleza remunerativa. (p. 45)

2.2.2.2.1.2. Beneficios sociales que tenemos

2.2.2.2.1.2.1. Gratificaciones

Según BDO (2018) en la guía de los principales beneficios sociales señala:

Aspectos Generales

Las gratificaciones legales se encuentran actualmente reguladas por la Ley N° 27735 y por su reglamento, el Decreto Supremo N° 005- 2002-TR. En dichas

normas se establece el otorgamiento de dos gratificaciones al año con ocasión a las Fiestas Patrias y la Navidad, como derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Dicho derecho es otorgado sin perjuicio de la modalidad del contrato de trabajo ni del tiempo de prestación de servicios del trabajador (contratados a plazo indeterminado, mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad, o a tiempo parcial).

Gratificaciones Ordinarias

Requisitos

Para que el trabajador pueda percibir sus gratificaciones ordinarias, deberá contar con un mes de servicios como mínimo antes del mes en que corresponde efectuar el abono de la gratificación. Además, el trabajador deberá encontrarse laborando efectivamente durante la primera quincena de julio o diciembre de cada año, respectivamente.

Tiempo de Servicios

Las gratificaciones ordinarias se pagan de acuerdo al tiempo de trabajo efectivo. Siendo ello así, aquellos días que no se consideren como efectivamente laborados se deducirán a razón de treintavos de la fracción correspondiente a pagar por dicho concepto. Excepcionalmente, se considerarán como tiempo efectivamente laborado los siguientes supuestos:

Periodo de descanso vacacional.

Licencias con goce de haberes.

Descansos o licencias que originen el pago de subsidios.

Días considerados como laborados para todo efecto legal.

Marcelo (2019) señala:

Monto de la Gratificación

Cumplidos los requisitos y considerando el tiempo computable correspondiente, se puede observar que existen 2 supuestos de pago de las gratificaciones ordinarias:

- Gratificación ordinaria íntegra: cumplidos los requisitos para la percepción de las gratificaciones, se otorgarán las gratificaciones ordinarias. Éstas equivalen a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado durante todo el semestre (enero - junio, julio - diciembre).
- Gratificación ordinaria proporcional: si el trabajador ha laborado por un período menor a un semestre, las gratificaciones se reducirán proporcionalmente. Para ello, es indispensable que el trabajador haya laborado, como mínimo, 1 mes en el semestre correspondiente.

Remuneración Computable

La remuneración computable para el cálculo de las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad es la vigente al 30 de junio y 30 de noviembre, respectivamente. Para dichos efectos, se considerará como remuneración computable a la remuneración básica y todos aquellos conceptos remunerativos que perciba el trabajador, en dinero o especie, como contraprestación por sus servicios. (p. 46)

Marcelo (2019) señala:

Ante los supuestos de remuneraciones principales y variables, se considerará como remuneración computable al promedio de las remuneraciones percibidas en el semestre correspondiente. Sin perjuicio que las mismas hayan sido percibidas en menos de 3 oportunidades en el periodo correspondiente.

Por otro lado, en caso de remuneraciones complementarias de naturaleza imprecisa o variable, las mismas serán consideradas en el cálculo de la remuneración computable siempre que hayan sido percibidas en 3 oportunidades como mínimo en el periodo de 6 meses computables. Siendo así, se incorporarán al monto a percibir como gratificación a razón de 1/6 de la suma de las mismas.

Oportunidad de Pago

Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad deben ser pagadas en la primera quincena de julio y diciembre, respectivamente. Dicho plazo es indisponible para cualquiera de las partes en la relación laboral.

Gratificaciones Truncas

Requisitos para su Percepción

El derecho a percibir las gratificaciones truncas se genera al momento de cese del trabajador, siempre que el mismo hubiese laborado como mínimo 1 mes en el semestre respectivo.

Monto de la Gratificación

El monto de la gratificación trunca se determinará de manera proporcional a los meses calendarios completos laborados en el periodo en que se produzca el cese.

Remuneración Computable

La remuneración computable para el cálculo de las gratificaciones será la remuneración vigente al mes inmediato anterior a la fecha de cese del trabajador.

Oportunidad de Pago

La gratificación trunca se pagará de manera conjunta con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. (p. 47)

Según BDO (2018) en la guía de los principales beneficios sociales señala:

Compensación por tiempo de servicios

A. Aspectos Generales

La Compensación por Tiempo de Servicios (en adelante, CTS) es un beneficio social otorgado a los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada con la finalidad de prevenir las contingencias que originan a estos su cese laboral; encontrándose inafecta a todo tributo creado o por crearse, al pago de aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y Pensiones; al igual que sus intereses, depósitos, traslados y retiros.

Este beneficio se encuentra regulado por lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, Ley de Compensación por Tiempo

de Servicios (en adelante, TUO de la LCTS) y por su Reglamento, el Decreto Supremo N° 004-97-TR.

Es importante precisar la naturaleza de la CTS como un “seguro de desempleo”, en tanto constituye un ingreso que procura proteger al trabajador cuando se encuentre desempleado y que, por tanto, no debería utilizarse mientras éste tenga trabajo.

B. Requisitos

Tendrá derecho a dicho beneficio el trabajador sujeto al régimen laboral común de la actividad privada que cumpla cuando menos, en promedio, una jornada mínima diaria de 4 horas; y que haya laborado como mínimo 1 mes en el semestre correspondiente.

C. Monto de la CTS

La CTS será equivalente a tantos dozavos de la remuneración del trabajador como meses completos haya laborado en el semestre respectivo (noviembre-abril, mayo-octubre). De esta forma, si el trabajador laboró el semestre completo, la entidad empleadora deberá depositarle media remuneración; de no haberlo laborado completamente, las fracciones de mes deberán ser depositadas por treintavos.

D. Tiempo de Servicios

Para el cálculo de la CTS se debe considerar el tiempo de servicios efectivamente laborado por el trabajador dentro del territorio peruano o en el extranjero, cuando el trabajador mantenga vínculo laboral vigente con la entidad empleadora que lo contrata en Perú.

Son computables solo los días de trabajo efectivo, los días de inasistencias injustificadas se podrán deducir del tiempo de servicios a razón de un treintavo por cada día.

E. Remuneración Computable

Forman parte de la remuneración computable para el cálculo de la CTS, la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador (en dinero o en especie), siempre que sean de su libre disposición.

También forma parte de la remuneración computable, el valor de la alimentación principal (el desayuno, almuerzo, y la cena o comida) proporcionada en dinero o en especie por la entidad empleadora. Es importante señalar que el refrigerio que no constituye alimentación principal no será considerado como remuneración para ningún efecto legal.

F. Oportunidad de Pago

La entidad empleadora debe realizar el depósito de la CTS en la institución financiera elegida por el trabajador (en adelante, entidad depositaria), dos veces al año, dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre.

G. Hoja de Liquidación de la CTS

Efectuado el depósito de la CTS, dentro de los 5 días hábiles siguientes, la entidad empleadora debe entregar a cada trabajador, bajo cargo, una liquidación debidamente firmada por el representante legal de la entidad empleadora

H. Libre Disponibilidad de los Depósitos de CTS

Con la finalidad de reactivar la economía y promover el consumo, se han dado normas que facultan a los trabajadores disponer de parte de sus depósitos acumulados de CTS.

Es así que en el 2015, mediante Ley N° 30334, se estableció que los trabajadores puedan disponer, libremente y de forma permanente del 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición.

I. CTS ante Casos de Desvinculación Laboral

La CTS que se devengue al cese del trabajador por período menor a un semestre le será pagada directamente por la entidad empleadora en calidad de CTS trunca dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. (p. 06)

Según BDO (2018) en la guía de los principales beneficios sociales señala:

Descanso Vacacional Anual

A. Aspectos Generales

El derecho al Descanso Vacacional Anual se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 713 y por su Reglamento, el Decreto Supremo N° 012-92-TR. De conformidad con dichas disposiciones, los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tendrán derecho a gozar de un descanso vacacional anual de 30 días, percibiendo una remuneración equivalente a aquella que hubiesen percibido de continuar laborando.

B. Requisitos

El trabajador podrá hacer uso de su descanso vacacional siempre que cumpla con 1 año completo de servicios (primera condición) y que haya cumplido el récord vacacional correspondiente (segunda condición), según fuere su jornada de trabajo semanal.

C. Monto de la Remuneración Vacacional

La remuneración vacacional será equivalente a aquella que el trabajador hubiere percibido habitualmente en caso de continuar laborando, considerándose como remuneración computable a aquella considerada para efectos del cálculo correspondiente de la CTS. Por otro lado, la remuneración vacacional deberá ser abonada al trabajador antes del inicio de su periodo de descanso vacacional programado.

D. Oportunidad de Goce del Descanso Vacacional Anual

La oportunidad en que el trabajador puede hacer uso de su periodo de descanso vacacional deberá ser fijada de común acuerdo con su entidad empleadora, teniendo en consideración aspectos como las necesidades de funcionamiento de la entidad empleadora e intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo, la entidad empleadora, en uso de su facultad directriz, decidirá sobre la oportunidad de goce.

E. Vacaciones Truncas

Ante el supuesto de desvinculación de un trabajador, la entidad empleadora deberá considerar, al momento de la liquidación de beneficios sociales a ser entregados al trabajador, lo siguiente:

- Los pagos pendientes por concepto de vacaciones ordinarias.

- El pago por concepto de vacaciones trucas generado por el récord vacacional no alcanzado dentro del período anual, mismo que deberá ser abonado a razón de tantos dozavos y treintavos de remuneración computable como meses y días haya laborado, respectivamente.

Cabe precisar que se podrá abonar la suma de vacaciones trucas siempre que el trabajador acredite como mínimo 1 mes de servicios a su entidad empleadora.
(p. 9)

III. Hipótesis

El proceso judicial sobre sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 tramitado en el Primer Juzgado Civil de Sullana, perteneciente al Distrito Judicial Sullana, Perú, 2020 evidenciará las siguientes características: cumplimiento de plazo y condiciones que garantizan el debido proceso.

3.1. Hipótesis General

El proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, 2020, del distrito Judicial de Sullana-Sullana, 2020, evidencia las siguientes características: cumplimiento de plazo y el debido proceso.

3.2. Hipótesis específicas

El proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, 2020, del distrito Judicial de Sullana-Sullana, 2020 identificará las características: cumplimiento de plazo y el debido proceso

El proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, 2020, del distrito Judicial de Sullana-Sullana, 2020, describirá las características: cumplimiento de plazo y el debido proceso

4. METODOLOGÍA

Tipo de investigación. La investigación será de tipo cualitativa (Mixta).

Cualitativa. Cuando la investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de lo humano (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

El perfil cualitativo del proyecto, se evidenciará en la simultánea concurrencia del análisis y la recolección, porque son actividades necesarias para identificar los indicadores de la variable. Además; el proceso judicial (objeto de estudio) es un producto del accionar humano, que están evidenciados en el desarrollo del proceso judicial, donde hay interacción de los sujetos del proceso buscando la controversia planteada; por lo tanto, para analizar los resultados se aplicará la hermenéutica (interpretación) basada en la literatura especializada desarrollada en las bases teóricas de la investigación, sus actividades centrales serán: a) sumersión al contexto perteneciente al proceso judicial (para asegurar el acercamiento al fenómeno y, b) Ingresar a los compartimentos que componen al proceso judicial, recorrerlos palmariamente para reconocer en su contenido los datos correspondientes a los indicadores de la variable.

En síntesis, según Hernández, Fernández y Batista, (2010) la investigación cuantitativa – cualitativa (mixta) “(...) implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (p. 544). En el presente trabajo, la variable en estudio tiene indicadores cuantificables; porque son aspectos que deben manifestarse en distintas etapas del desarrollo del proceso judicial (claridad, cumplimiento de plazos y congruencia); por lo tanto pueden cuantificarse y a su vez interpretarse de acuerdo a las bases teóricas para facilitar la obtención de las características del fenómeno estudiado.

Nivel de investigación. El nivel de la investigación será exploratoria y descriptiva.

Exploratoria. Cuando la investigación se aproxima y explora contextos poco estudiados; además la revisión de la literatura revela pocos estudios respecto a las características del objeto de estudio (procesos judiciales) y la intención es indagar nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Respecto al objeto de estudio, no es viable afirmar que se agotó el conocimiento respecto a la caracterización de procesos judiciales reales, y si bien, se insertaron antecedentes estos, son próximos a la variable que se propone estudiar en el presente trabajo, además será de naturaleza hermenéutica.

Descriptiva. Cuando la investigación describe propiedades o características del objeto de estudio; en otros términos, la meta del investigador(a) consiste en describir el fenómeno; basada en la detección de características específicas. Además, la recolección de la información sobre la variable y sus componentes, se manifiesta de manera independiente y conjunta, para luego ser sometido al análisis. (Hernández, Fernández & Batista, 2010)

En opinión de Mejía (2004) en las investigaciones descriptivas el fenómeno es sometido a un examen intenso, utilizando exhaustiva y permanentemente las bases teóricas para facilitar la identificación de las características existentes en él, para luego estar en condiciones de definir su perfil y arribar a la determinación de la variable.

En la presente investigación, el nivel descriptivo, se evidenciará en diversas etapas: 1) en la selección de la unidad de análisis (Expediente judicial, porque es elegido de acuerdo al perfil sugerido en la línea de investigación: proceso contencioso, concluido por sentencia, con interacción de ambas partes, con intervención mínima de dos órganos jurisdiccionales) y 2) en la recolección y análisis de los datos, basada en la revisión de la literatura y orientados por los objetivos específicos.

4.1. Diseño de la investigación

No experimental. Cuando el fenómeno es estudiado conforme se manifestó en su

contexto natural; en consecuencia, los datos reflejarán la evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad de la investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Retrospectiva. Cuando la planificación y recolección de datos comprende un fenómeno ocurrido en el pasado (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

Transversal. Cuando la recolección de datos para determinar la variable, proviene de un fenómeno cuya versión pertenece a un momento específico del desarrollo del tiempo (Supo, 2012; Hernández, Fernández & Batista, 2010).

En el presente estudio, no habrá manipulación de la variable; por el contrario, las técnicas de la observación y análisis de contenido se aplicará al fenómeno en su estado normal, conforme se manifestó por única vez en un tiempo pasado. Los datos serán recolectados de su contexto natural, que se encuentran registrados en la base documental de la investigación (expediente judicial) que contiene al objeto de estudio (proceso judicial) que se trata de un fenómeno acontecido en un lugar y tiempo específico pasado. El proceso judicial, es un producto del accionar humano quien premunido de facultades otorgados por la ley interactúa en un contexto específico de tiempo y espacio, básicamente son actividades que quedaron registrados en un documento (expediente judicial).

Por lo expuesto, el estudio será no experimental, transversal y retrospectivo.

4.2. Población y Muestra

El universo es el conjunto de individuos de los que se desea conocer algo en una investigación, puede estar compuesta por animales, plantas, registros médicos, muestras de laboratorio, entre otros se definen criterios de inclusión y exclusión para determinar quiénes componen la población. Mientras que la muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo, puede ser probabilística o no

probabilística, una muestra probabilística es aquella extraída de una población de tal manera que todo miembro de esta última tenga una probabilidad conocida de estar incluido en la muestra. En el presente trabajo los datos que identifican que el universo es los procesos concluidos en los distritos judiciales en el Perú. En el presente trabajo los datos que identifican a la unidad de análisis fueron: N° de expediente 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, 2020, sobre pago de beneficios sociales del distrito Judicial de Sullana-Sullana, 2020

4.3. Definición y operacionalización de la variable e indicadores

Respecto a la variable, en opinión de Centty (2006, p. 64):

“Las variables son características, atributos que permiten distinguir un hecho o fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un Objeto de Investigación o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y cuantificados, las variables son un Recurso Metodológico, que el investigador utiliza para separar o aislar los partes del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e implementarlas de manera adecuada”.

En el presente trabajo la variable será: características del proceso judicial de divorcio por causales de violencia física y psicológica y separación de hecho.

Respecto a los indicadores de la variable, Centty (Citado por Marcelo, 2019) expone:

Son unidades empíricas de análisis más elementales por cuanto se deducen de las variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente y después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de información, pero también demuestran la objetividad y veracidad de la información obtenida, de tal manera significan el eslabón principal entre las hipótesis, sus variables y su demostración. (p. 61)

Por su parte, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, (2013) refieren: “los indicadores son manifestaciones visibles u observables del fenómeno” (p. 162).

En el presente trabajo, los indicadores son aspectos susceptibles de ser reconocidos en el interior del proceso judicial, son de naturaleza fundamental en el desarrollo procesal, prevista en el marco constitucional y legal.

En el cuadro siguiente se observa: la definición y operacionalización de la variable del proyecto

Objeto de estudio	Variable	Indicadores	Instrumento
Proceso judicial	Características	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de plazo • Condiciones que garantizan el debido proceso • 	Guía de observación
<i>Recurso físico que registra la interacción de los sujetos del proceso con el propósito de resolver una controversia</i>	<i>Atributos peculiares del proceso judicial en estudio, que lo distingue claramente de los demás.</i>		

4.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos

Herrada (2016) señala:

Para el recojo de datos se aplicaron las técnicas de la observación: punto de partida del conocimiento, contemplación detenida y sistemática, y el análisis de contenido: punto de partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; no basta con captar el sentido superficial o manifiesto de un texto sino llegar a su contenido profundo y latente (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013).

Ambas técnicas se aplicaron en diferentes etapas de la elaboración del estudio: en la detección y descripción de la realidad problemática; en la detección del problema de investigación; en el reconocimiento del perfil del proceso judicial existente en los expedientes judiciales; en la interpretación del contenido de las sentencias; en la recolección de datos al interior de las sentencias, en el análisis de los resultados, respectivamente.

Respecto al instrumento: es el medio a través del cual se obtendrá la

información relevante sobre la variable en estudio. Uno de ellos es la lista de cotejo y se trata de un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: sí, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros (SENCE – Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2do y 4to párrafo).

En la presente investigación se utilizó un instrumento denominado lista de cotejo, éste se elaboró en base a la revisión de la literatura; fue validado, mediante juicio de expertos (Valderrama, s.f) que consiste en la revisión de contenido y forma efectuada por profesionales expertos en un determinado tema.

El instrumento presenta los indicadores de la variable; es decir, los criterios o ítems a recolectar en el texto de las sentencias; se trata de un conjunto de parámetros de calidad, preestablecidos en la línea de investigación, para ser aplicados a nivel pre grado.

Se denomina parámetros; porque son elementos o datos desde el cual se examina las sentencias; porque son aspectos específicos en los cuales coinciden o existe aproximación estrecha entre las fuentes que abordan a la sentencia, que son de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial; respectivamente. (p. 106-107)

4.5. Plan de análisis

Huarhua (2017) menciona:

Es un diseño establecido para la línea de investigación se inicia con la presentación de pautas para recoger los datos, se orienta por la estructura de la sentencia y los objetivos específicos trazados para la investigación; su aplicación implica utilizar las técnicas de la observación y el análisis de contenido y el instrumento llamado lista de cotejo, usando a su vez, las bases teóricas para asegurar el asertividad en la identificación de los datos buscados en el texto de las sentencias. (p. 2020)

Asimismo, corresponde destacar que las actividades de recolección y análisis fueron

simultáneas que se ejecutaron por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz Gonzáles (2008). (La separación de las dos actividades solo obedece a la necesidad de especificidad).

4.6. De las técnicas y procedimiento de recolección de datos

Herrada (2016) señala:

La descripción del acto de recojo de datos se encuentra en él, denominado:
Procedimiento de recolección, organización, calificación de los datos y determinación de la variable.

4.6.1. Del plan de análisis de datos

4.6.1.1. La primera etapa

Fue actividad abierta y exploratoria, que consistió en una aproximación gradual y reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la investigación; donde cada momento de revisión y comprensión fue una conquista; es decir, un logro basado en la observación y el análisis. En esta fase se concretó, el contacto inicial con la recolección de datos.

4.6.1.2. Segunda etapa

También fue una actividad, pero más sistémica que la anterior, técnicamente en términos de recolección de datos, igualmente, orientada por los objetivos y la revisión permanente de la literatura, que facilitó la identificación e interpretación de los datos.

4.6.1.3. La tercera etapa

Igual que las anteriores, fue una actividad; de naturaleza más consistente, fue un análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de nivel profundo orientada por los objetivos, donde hubo articulación entre los datos y la revisión de la literatura.

Estas actividades se evidenciaron desde el instante en que el investigador(a) aplicó la observación y el análisis en el objeto de estudio; es decir las sentencias, que resulta ser un fenómeno acontecido en un momento exacto del curso del tiempo, lo cual quedó documentado en el expediente judicial; es decir, en la unidad de análisis, como es natural a la primera revisión la intención

no es precisamente recoger datos; sino, reconocer, explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que conforman la revisión de la literatura.

Acto seguido, el(a) investigador(a) empoderado(a) de mayor dominio de las bases teóricas, manejó la técnica de la observación y el análisis de contenido; orientado por los objetivos específicos inició el recojo de datos, extrayéndolos del texto de la sentencia al instrumento de recolección de datos; es decir, la lista de cotejo, lo cual fue revisado en varias ocasiones.

Esta actividad, concluyó con una actividad de mayor exigencia observacional, sistémica y analítica, tomando como referente la evasión de la literatura, cuyo dominio fue fundamental para proceder a aplicar el instrumento y la descripción especificada.

Finalmente, los resultados surgieron del ordenamiento de los datos, en base al hallazgo de los indicadores o parámetros de calidad en el texto de las sentencias en estudio, conforme a la descripción realizada. La autoría de la elaboración del instrumento, recojo, sistematización de los datos para obtener los resultados y el diseño de los cuadros de resultados. (p. 107-109)

4.7. Matriz de consistencia lógica

Herrada (2016) señala:

En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): “La matriz de consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco columnas en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de investigación: problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y la metodología” (p. 402).

Por su parte, Campos (2010) expone: “Se presenta la matriz de consistencia lógica, en una forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la comprensión de la coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de investigación” (p. 3).

En el presente trabajo la matriz de consistencia será básica: problema de investigación y objetivo de investigación; general y específicos; respectivamente. No se presenta la hipótesis, porque la investigación es de carácter univariado y de nivel exploratorio descriptivo. Dejando la variable e

indicadores y la metodología a los demás puntos expuestos en la presente investigación. En términos generales, la matriz de consistencia sirve para asegurar el orden, y asegurar la científicidad del estudio, que se evidencia en la logicidad de la investigación. (p. 109-110)

Cuadro2. Matriz de consistencia

Título: Caracterización del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, del Distrito Judicial Sullana-Sullana, 2020

CUADRO 2. Matriz de Consistencia Lógica

TÍTULO: “Caracterización del proceso sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 del distrito judicial de Sullana –Sullana, 2020

G/E	PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLE	INDICADORES
General	¿Cuáles son las características del proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales, en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, del distrito judicial de Sullana-Sullana, 2020?	Determinar las características del proceso judicial sobre Pago de beneficios sociales, en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 del distrito judicial de Sullana- Sullana, 2020, según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes.	El Proceso Judicial sobre Pago de beneficios sociales; Expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01; distrito judicial de Sullana-Sullana, 2020, evidencia las siguientes características: cumplimiento de plazo, y condiciones que garantizan el debido proceso en función de la mejora continua de la calidad de las decisiones judiciales.	Características: Atributos peculiares del proceso judicial en estudio, que lo distingue claramente de los demás.	a. Cumplimiento de plazo b. Condiciones que garantizan el debido proceso
	¿Se evidencia cumplimiento de plazos, en el proceso en estudio?	Identificar las condiciones que garantizan el Debido Proceso y el Cumplimiento de Plazos en el Proceso Judicial sobre Pago de beneficios sociales, en el Expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 del Distrito Judicial de Sullana- Sullana, 2020, según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes.	En el proceso en estudio, si evidencia cumplimiento de plazos.		
Específicos	¿Se evidencia las garantías del debido proceso, en el proceso judicial en estudio?	Describir las condiciones que garantizan el Debido Proceso y el Cumplimiento de Plazos en el Proceso Judicial sobre Pago de beneficios sociales, en el Expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 del Distrito Judicial de Sullana- Sullana, 2020, según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes.	En el proceso en estudio, si evidencia cumplimiento de plazos.		

4.8. Principios éticos

El presente estudio, está guiado bajo los principios éticos establecidos por nuestra Universidad y que se encuentran plasmados en nuestro Código de Ética para la Investigación Versión 002 aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con Resolución N° 0973-2019-CU-ULADECH católica, señalando los siguientes: Protección a las personas, Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, Libre participación y derecho a estar informado, Beneficencia no maleficencia, Justicia e Integridad científica. De los cuales estamos aplicando cinco de los seis principios antes señalados.

Al referirnos sobre la Protección a las personas, se ha suscrito una Declaración de compromiso ético, en el cual ese asume la obligación de no difundir hechos e identidades existentes en la unidad de análisis, pues en todo el trabajo de investigación no se reveló los datos de identidad de las personas naturales y jurídicas que fueron protagonistas en el proceso judicial. También se debe hacer realidad en el transcurso del desarrollo de la investigación el derecho a estar informados para que tengamos en claro cuál es el propósito y la finalidad de dicha investigación que este caso es netamente académica. Se busca también no causar daños sino maximizar los beneficios asegurando el bienestar de las personas que intervienen en la investigación; ejercer como investigador un juicio razonable y ponderable para no dar lugar o tolerancia a prácticas injustas y por ultimo evaluar y declarar daños, peligros y beneficios que puedan afectar a los que participan en la investigación haciendo referencia a la Integridad científica

V.- RESULTADOS

5.1.- Resultados:

Los siguientes resultados de la investigación están planteados en los objetivos generales y específicos de dicha investigación para ello se presentará de manera concisa.

Cuadro 1. Respecto al cumplimiento de los plazos

N ^o	Acto procesal	Notificaciones	Si cumple	No cumple
1	Calificación de la demanda en el plazo razonable – auto admisorio de la demanda- 30-03-2015	13-05-2015	X	
2	Contestación de demanda	14-05-2015	X	
3	Audiencia única	09-06-2015	X	
5	Sentencia de primera instancia 18-06-2015	18-06-2015	X	
6	Recurso de apelación	25-06-2015	X	
7	Concesorio del recurso de apelación	12-08-2015	X	
8	Impulso de la apelación	24-08-2015	X	
9	Vista de la causa	07-07-2016	X	
10	Sentencia de vista.	15-07-2016	X	

Fuente: expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 del distrito judicial de Sullana –Sullana, 2020

Cuadro 2. Respeto de las condiciones que garantizan el debido proceso

N°	Acto procesal	Si cumple	No cumple
1	Notificación a las partes de las resoluciones judiciales	X	
2	Admisión, actuación y valoración de medios probatorios.	x	
3	Designación de curador procesal cuando corresponda.	--	
4	Motivación de las resoluciones judiciales que corresponden	x	
5	Interpretación y aplicación correcta de la norma jurídica.	x	
6	Interpretación y aplicación correcta de principios	x	
7	Cumplimiento de garantías procesales	X	

Fuente: expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 del distrito judicial de Sullana –Sullana, 2020

5.2. Análisis de resultados

Cuadro 1. Respeto del cumplimiento de plazos

Bandrés, J. (1992) comenta que:

El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable se encuentra reconocido por el artículo 8. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), el cual señala que “toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable”. A su turno, el Nuevo Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 957- establece en el artículo 1º de su Título Preliminar que “la justicia penal (...) se imparte (...) en un plazo razonable”. Estos dispositivos reflejan la indiscutible importancia del respeto y protección de este derecho como garantía del debido proceso.

En tal sentido, resulta imperioso tener en claro lo que debe entenderse por plazo razonable, los elementos para su análisis, así como la interpretación y relevancia jurídica de este derecho en las diferentes etapas del proceso penal. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), así como del Tribunal Constitucional peruano (TC) brindan importantes consideraciones al respecto, cuyo estudio y análisis es indispensable para el mejor desempeño de la función fiscal.

Cuadro 2. Respeto de las condiciones que garantizan el debido proceso

De la presente investigación se pudo evidenciar que si se cumplió con todas las garantías del debido proceso, con relación a ello se ha pronunciado el Tribunal Constitucional lo cual precisa en reiteradas jurisprudencias que el debido proceso supone el cumplimiento de todas las garantías requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflicto entre privados a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. (PERÚ, 2014).

VI. CONCLUSIONES

Se concluyó que la caracterización del Proceso Sobre Pago de beneficios sociales en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 del distrito judicial de Sullana – Sullana, 202, evidenció las siguientes características relevantes.

1. Se evidenció el cumplimiento de plazos, en el proceso judicial en estudio, si cumple (cuadro 1).

2. En el proceso judicial en estudio si se evidenció las condiciones que garantizan el debido proceso.

Las características identificadas son de suma importancia para el desarrollo, motivación, y dirección del proceso. En consecuencia la hipótesis general de la presente investigación fue corroborada al evidenciarse el cumplimiento de la variable de investigación denominada caracterización del proceso

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, S. y Morales, J.** (2005). El derecho de acceso a la información pública – Privacidad de la intimidad personal y familiar. En: Gaceta Jurídica. *LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. Análisis artículo por artículo. Obra colectiva escrita por 117 autores destacados del País.* (pp.81-116). T-I. (1ra. Ed.). Lima.
- Alzamora, M.** (s.f.), *Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso.* (8va. Edic.), Lima: EDDILI
- Bautista, P.** (2007). *Teoría General del Proceso Civil.* Lima: Ediciones Jurídicas.
- Cajas, W.** (2011). *Código Civil y otras disposiciones legales.* (15ª. Edic.) Lima: Editorial RODHAS.
- Cabanellas; G.** (1998); *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.* Actualizada, corregida y aumentada. (25ta Edición). Buenos Aires: Heliasta
- Casación** N° 2007-T-07-F- LAMBAYEQUE.11/11.97
- Casal, J. y Mateu, E.** (2003). En Rev. Epidem. Med. Prev. 1: 3-7. *Tipos de Muestreo.* CReSA. Centre de Recerca en Sanitat Animal / Dep. Sanitat i Anatomia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Barcelona. Recuperado en: <http://minnie.uab.es/~veteri/21216/TiposMuestreo1.pdf> (23.11.2013)
- Coaguilla, J.** (s/f). *Los Puntos Controvertidos en el Proceso Civil.* Recuperado en: <http://drjaimecoaguila.galeon.com/articulo12.pdf>.
- Couture, E.** (2002). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil.* Buenos Aires: Editorial

IB de F. Montevideo.

Flores, P. (s/f). *Diccionario de términos jurídicos*; s/edit. Lima: Editores Importadores SA. T: I - T: II.

Gaceta Jurídica. (2005). *La Constitución Comentada. Obra colectiva escrita por 117 autores destacados del País.* T-II. (1ra. Edic). Lima.

Gonzáles, J. (2006). *La fundamentación de las sentencias y la sana crítica.* *Rev. chil. derecho* [online]. 2006, vol.33, n.1, pp. 93-107. ISSN 0718-3437. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0718-34372006000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es. (23.11.2013)

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Batista, P. (2010). *Metodología de la Investigación.* 5ta. Edición. México: Editorial Mc Graw Hill.

Lenise Do Prado, M., Quelopana Del Valle, A., Compean Ortiz, L. y Reséndiz Gonzáles, E. (2008). El diseño en la investigación cualitativa. En: Lenise Do Prado, M., De Souza, M. y Carraro, T. *Investigación cualitativa en enfermería: contexto y bases conceptuales. Serie PALTEX Salud y Sociedad 2000 N° 9.* (pp.87-100). Washington: Organización Panamericana de la Salud.

Mejía J. (2004). *Sobre la Investigación Cualitativa. Nuevos Conceptos y campos de desarrollo.* Recuperado de: http://www.sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/inv_sociales/N13_2004/a15.pdf . (23.11.2013)

Pásara, L. (2003). *Tres Claves de Justicia en el Perú.* <http://www.justiciaviva.org.pe/blog/?p=194> (23.11.2013)

Poder Judicial (2013). *Diccionario Jurídico*, recuperado de <http://historico.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario.asp>

Real Academia de la Lengua Española. (2001); *Diccionario de la Lengua Española*. Vigésima segunda edición. Recuperado de <http://lema.rae.es/drae/>

Rodríguez, L. (1995). *La Prueba en el Proceso Civil*. Lima: Editorial Printed in Perú.

Supo, J. (2012). *Seminarios de investigación científica. Tipos de investigación*. Recuperado de <http://seminariosdeinvestigacion.com/tipos-de-investigacion/>. (23.11.2013)

Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil Peruano. Recuperado en: <http://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-procesal-civil-per.pdf>.

Ticona, V. (1994). *Análisis y comentarios al Código Procesal Civil*. Arequipa. Editorial: Industria Gráfica Librería Integral.

Ticona, V. (1999). *El Debido Proceso y la Demanda Civil*. Tomo I. Lima. Editorial: RODHAS.

Universidad de Celaya (2011). *Manual para la publicación de tesis de la Universidad de Celaya*. Centro de Investigación. México. Recuperado de: http://www.udec.edu.mx/i2012/investigacion/manual_Publicacion_Tesis_Agosto_2011.pdf . (23.11.2013)

Valderrama, S. (s.f.). *Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación científica*. (1ra Ed.). Lima: Editorial San Marcos.

A N E X O

ANEXO 1: Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
N	Actividades	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1
1	Elaboración del Proyecto	X	X	X		5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1
2	Revisión del proyecto por el jurado de investigación			X	X	X	X										
3	Aprobación del proyecto por el Jurado de Investigación							X	X								
4	Exposición del proyecto al Jurado de							X	X								
5	Mejora del marco teórico y metodológico							X	X								
6	Elaboración y validación del instrumento de recolección de							X	X								
7	Elaboración del consentimiento informado (*)							X	X								
8	Recolección de datos							X	X								
9	Presentación de resultados							X	X								
10	Análisis e Interpretación de									X	X						
13	Revisión del informe final de la tesis por el Jurado de										X	X	X				
14	Redacción de artículo científico											X	X				
15	Presentación de ponencia en jornadas de investigación											x	X	X			
16	Pre banca													X	X		
17	Sustentación														X	X	

ANEXO 2: Presupuesto

Presupuestodesembolsable(Estudiante)			
Categoría	Base	%onúmero	Total(S/.)
Suministros(*)			
Impresiones	700	0.20	S/.140.00
Fotocopias	1000	0.10	S/. 100.00
Empastado	50	1	S/. 50.00
PapelbondA-4(500hojas)	1000	0.024	S/. 24.00
Lapiceros	6	1,50	S/. 9.00
Servicios			
Uso deTurnitin	50.00	2	S/. 100.00
Subtotal			S/. 423.00
Gastos de viaje			
Pasajes para recolectar información	48	2	S/. 96.00
Subtotal			
Total Presupuesto			S/. 519.00
Presupuestonodesembolsable(Universidad)			
Categoría	Base	%onúmero	Total(S/.)
Servicios			
Uso de Internet(Laboratorio de Aprendizaje Digital-LAD)	30.00	4	120.00
Búsqueda de información en base de datos	35.00	2	70.00
Soporte informático (Módulo de Investigación del ERP University -MOIC)	40.00	4	160.00
Publicación de artículo en repositorio institucional	50.00	1	50.00
Subtotal			400.00
Recurso humano			
Asesoría personalizada(5horasporsemana)	63.00	4	252.00
Subtotal			252.00
Total Presupuesto no			652.00
Total(S/.)			S/. 1,171.00

(*) se pueden agregar otros suministros que se utiliza para el desarrollo del proyecto.

Versión: 012	Código: R-RI	F. Implementación: 15-01-2019	Pág.: 1 de 28
Elaborado por: Rector	Revisado por: Dirección de Calidad	Aprobado por Consejo Universitario Resolución N°0014-2019-CU-ULADECH CATÓLICA Actualización aprobada por Consejo Universitario con código	

ANEXO 3: Instrumento de Recolección de Datos
PRIMERA INSTANCIA

DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO

1. Determina ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud las formalidades propias en el proceso. Si cumple
2. Explicita y evidencia congruencia con la “pretensión del demandante y demandado.” Si cumple
3. El procedimiento vigente, las partes delimitan el tema controvertido, ya que a ellas corresponde la exposición de los hechos. Si cumple
4. Explicita y evidencia congruencia con los “fundamentos fácticos expuestos por las partes.” Si cumple
5. Asegura el derecho de igualdad y de defensa de las partes en el proceso. Si cumple

VARIABLE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

I.1. PLAZOS PARA INTERPONER LA DEMANDA

El Artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente:

1. El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se

computará desde el momento de la remoción del impedimento.

2. Tratándose **del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial**, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. **Dicho plazo concluye treinta días hábiles** después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.

Para el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas:

- 1) El plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad.
- 2) Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo se inicia en dicho momento.
- 3) Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución.
- 4) La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo.

Sólo si la afectación se produce se deberá empezar a contar el plazo.
- 5) Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista.
- 6) El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda.

PLAZOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

1. En la resolución que admite la demanda, el Juez concederá al

demandado el plazo de cinco días para que conteste. **Si cumple**

2. Dentro de cinco días de contestada la demanda, o de vencido el plazo para hacerlo, el Juez expedirá sentencia, salvo que se haya formulado solicitud de informe oral, en cuyo caso el plazo se computará a partir de la fecha de su realización. **Si cumple**
3. Si se presentan excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto admisorio, el Juez dará traslado al demandante por el plazo de dos días; con la absolución o vencido el plazo para hacerlo, dictará un Auto de Saneamiento Procesal amparen las excepciones de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y caducidad. **Si cumple**
4. La apelación de la resolución que ampare una o más de las excepciones propuestas es concedida con efecto suspensivo. La apelación de la resolución que desestima la excepción propuesta es concedida sin efecto suspensivo. **Si cumple**
5. Si el Juez lo considera necesario, realizará las actuaciones que considere indispensables, sin notificación previa a las partes. Inclusive, puede citar a audiencia única a las partes y a sus abogados para realizar los esclarecimientos que estime necesarios. **Si cumple**
6. El Juez expedirá sentencia en la misma audiencia o, excepcionalmente, en un plazo que no excederá los cinco días de concluida ésta. **Si cumple**

7. El Juez en el auto de saneamiento, si considera que la relación procesal tiene un defecto subsanable, concederá un plazo de tres días al demandante para que lo subsane, vencido el cual expedirá una sentencia. En los demás casos, expedirá sentencia pronunciándose sobre el mérito. **Si cumple**
8. Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio, o que se asimilen a cualquiera de los casos previstos en el artículo 112 del Código Procesal Civil, serán sancionados con una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal. Dicha sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse del mismo acto. **Si cumple**

PLAZOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

9. La sentencia puede ser apelada dentro del tercer día siguiente a su notificación. El expediente será elevado dentro de los tres días siguientes a la notificación de la concesión del recurso. **Si cumple**

PLAZOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

10. El superior concederá tres días al apelante para que exprese agravios.
Recibida la expresión de agravios o en su rebeldía, concederá traslado por tres días, fijando día y hora para la vista de la causa, en la misma resolución. **Si cumple**
11. Dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación, las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la

vista de la causa. El superior expedirá sentencia dentro del plazo de cinco días posteriores a la vista de la causa, bajo responsabilidad. **Si cumple**

PLAZOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 del presente Código, la sentencia firme que declara fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada. Tratándose de omisiones, este plazo puede ser duplicado.
- Si el obligado no cumpliera dentro del plazo establecido, el Juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y disponga la apertura del procedimiento administrativo contra quien incumplió, cuando corresponda y dentro del mismo plazo.
- Transcurridos dos días, el Juez ordenará se abra procedimiento administrativo contra el superior conforme al mandato, cuando corresponda, y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.
- El Juez podrá sancionar por desobediencia al responsable y al superior hasta que cumplan su mandato, conforme a lo previsto por el artículo 22 de este Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario.
- En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto, y mantendrá su competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho. Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una

sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario y regule la situación injusta conforme al decisorio de la sentencia. Para efectos de una eventual impugnación, ambas sentencias se examinarán unitariamente.

- Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo.

PROCEDIMIENTO PARA REPRESIÓN DE ACTOS HOMOGÉNEOS

- Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo.

La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente

ANEXO 4 – Evidencia del proceso
CORTE SUPERIOR DE SULLANA
JUZGADO ESPECIALIZAD DE TRABAJO DE SULLANA
LEY N° 29497 - NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

EXPEDIENTE : 00176-2015-0-3101-JR-LA-01
DEMANDANTE : A
DEMANDADO : B
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
JUEZ : C.
SECRETARIO : D.

SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO: NUEVE

Sullana, Diecinueve de Setiembre Del año Dos MilDieciséis.

VISTA; La presente causa laboral, signada con el número N° **00176-2016-0-3101-JR-LA-01**, seguido por **A**, contra **B**, sobre **PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES**, tramitado en la vía del Proceso Ordinario Laboral.

PARTE EXPOSITIVA

El actor **A** sostiene en su escrito de demanda obrante de fojas 107 a 122, lo siguiente:

- Señala el actor que viene laborando para la B desde el 03 de setiembre de 2012 con contratos de Locación de Servicios N° 1179-2012/MPS-GAJ, de fecha 31.10.12, donde recibía un salario de S/. 600.00, previa presentación de recibos por honorarios. Posteriormente el 26 de noviembre del 2012 se realizó el segundo contrato por Locación de Servicios, por el periodo de 03 meses a partir de octubre de 2012 hasta diciembre de 2012, con un salario de S/ 800.00 que mantiene a la actualidad.
- Señala, además, que a partir de agosto de 2013 la B comenzó a hacer sus pagos de salarios sin ningún tipo de contrato, solamente con la presentación de sus recibos por honorarios profesionales, lo cual hace hasta la actualidad (febrero del 2015).

- Indica también que su actividad laboral es el mantenimiento y funcionamiento de la cámara de bombeo ubicada en la urbanización popular Nueva Sullana del distrito y provincia de Sullana, trabajando en un horario que va desde las 7.00 de la mañana hasta las 7.00 de la noche, de lunes a domingo de manera ininterrumpida, habiendo transcurrido desde la fecha de inicio más de 02 años y 7 meses, laborando más de 10 horas diarias, sin que haya recibido ningún tipo de beneficio social, pese a la desnaturalización del contrato, pues se entiende el cambio de régimen a laboral por no tener contrato por escrito, pedido que ha tenido que realizarlo ante el Ministerio de Trabajo el día 05 de enero de 2015, creándose el expediente N° AI-002-2015-DRTPE-ZTPES.

1.1) La entidad demandada **B** contestó la demanda, que obra de fojas 146 a fojas 150, en los siguientes términos:

- Señala que, el actor efectuó trabajos como prestación personal a través de fichas de mantenimiento, no existiendo relación laboral con el demandante. Asimismo, señala que el Estado puede en función a sus necesidades de cada ente orgánico, tal como lo son las comunas, contratar de forma directa, tal como lo establece el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Señala, además, que cumpliendo con lo establecido por la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, así como de conformidad del artículo 19° de la norma anteriormente citada resulta válido la contratación de personal para prestación de servicios.

- Indica, también, que si bien existe una presunción de laboralidad, no es menos cierto que las normas precitadas autorizan la contratación de personal por órdenes de servicios, con lo cual tal presunción se ve enervada, que sin perjuicio de ello, e incluso en el supuesto negado, conforme a lo regulado en el artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que el personal empleado está sujeto al régimen laboral de la actividad pública, es decir, que el demandante al no haber sido un personal de limpieza, un chofer, ni un agente de serenazgo no estaba sujeta al régimen de la actividad privada, más aún si su función era de operador de cámara de bombeo, siendo por ello, improcedente la demanda planteada por no corresponder.

Actividad Procesal

El escrito de demanda que corre en autos de folios 107 a 122.

- El escrito de contestación de demanda que corre en autos de folios 146 a fojas 150.
- El Acta de Audiencia de Conciliación que corre en autos de folios 135 a 136, y su grabación de audio y video.
- El Acta de Audiencia de Juzgamiento que corre en autos de folios 153 a 157, y su grabación de audio y video.
- Sentencia de primera instancia, que corre en autos de folios 159 a 165.
- El escrito de apelación de la entidad demandada que corre en autos de folios 168 a 171.
- El escrito de apelación del actor que corre en autos de 173 a 180.
- Sentencia de Vista que corre en autos de folios 209 a 214.

Sentencia de Primera Instancia

Mediante Resolución número Cuatro, de fecha 16 de junio de 2015, El A Quo resuelve declarando infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, deducida por la B. Asimismo, declara fundada en parte la demanda sobre pago de remuneraciones no pagadas en la suma de S/ 1,600.00 correspondientes al mes de enero y febrero del 2015. Y finalmente declara improcedente el pago de Beneficios Sociales consistentes en Compensación por Tiempo de Servicios, Vacaciones y Gratificaciones; así como el pago de horas extras, y labores en domingos y feriados.

Sentencia de Segunda Instancia

Mediante Sentencia de Vista la Sala Mixta de esta Corte Superior declara Nula la Resolución número Cuatro, que contiene la Sentencia apelada, de fecha 16 de junio del 2015, debiendo el A Quo cumplir con renovar el acto procesal afectado conforme al considerando Séptimo de la Sentencia de Vista, en el sentido de emitir expreso pronunciamiento sobre la naturaleza de los contratos celebrados entre el actor y la demandada, y de ser el caso de disponer el pago de los beneficios sociales que conforme a ley le corresponderían.

PARTE CONSIDERATIVA: INTRODUCCIÓN

PRIMERO.- El proceso laboral¹ es un instrumento procesal cuyo fin es dar solución a

¹ El proceso laboral se concreta en el conjunto de normas, principios e instituciones que constituyen la legislación laboral, por cuyo medio el Estado, ejercitando su función jurisdiccional, administra justicia laboral. Es decir, se entiende “por procesos laborales los concebidos para resolver litigios en que se invocan reglas y normas relativas al trabajo dependiente”, como un conjunto de actos procesales que se desarrollan en forma progresiva, sistemática y teleológicamente con el objeto de resolver un conflicto laboral. GAMARRA

los conflictos jurídicos de naturaleza laboral, y en especial, destacando aquellos que la ley señala como competencia de los juzgados especializados de trabajo, o de los jueces mixtos, según sea el caso –a falta de órganos jurisdiccionales especializados asumen competencia los juzgados mixtos, esto con el fin de llegar a realizar la justicia impartiendo conforme a derecho, pues, el camino trazado es alcanzar la paz en sociedad. Para ello, resulta de imperiosa necesidad señalar que el proceso laboral tiene que desarrollarse bajo los lineamientos del Principio Derecho del Debido Proceso, que viene a ser un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez competente e independiente, pues, el Estado no solo está obligado a prever la prestación jurisdiccional (cuando se ejercita los derechos de acción y contradicción), sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas de modo que se asegure un juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial². Como señala el maestro español Rodríguez Piñero³ “El derecho procesal del Trabajo se inserta en la línea de lo

que la doctrina de habla hispana ha llamado Derecho Procesal Social; es decir, el proceso de trabajo ha de ser un proceso “socializado”, lo cual supone necesariamente un proceso como valor primordial (...) tenga la búsqueda de la verdad objetiva y como igualdad admita la igualdad sustancial, sacrificando así a veces la igualdad formal o la libertad tradicional de iniciativa de las partes. Esta socialización no debe, sin embargo, llevarse a extremos tales que se destruya el personalismo que está en la esencia propia del Derecho del Trabajo; se trata de “asegurar la justicia sin destruir la libertad”. De ahí el carácter “intermedio y peculiar” del proceso de trabajo, que responde a la peculiar compenetración, fusión y el equilibrio de lo privado y lo público, lo disponible y lo indisponible, lo individual y lo social que es propio del Derecho del Trabajo”. Es por ello que, el proceso laboral resulta ser el instrumento procesal idóneo para resolver los conflictos originados por el binomio trabajador – empleador, actuando siempre bajo la

VILCHEZ, Leopoldo. En: Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. AVALOS JARA, Oxal. Jurista Editores. Junio 2011. Pag. 36. 918 pp.

² DE BERNARDIS, Luis Marcelo, citado por Ticona Postigo, Víctor. Análisis y comentarios al Código Procesal Civil. 3ra. Edición. Grijley. Lima. 2005. P.8

³ RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER, Miguel. “Sobre los Principios informadores del proceso del Trabajo. En: El Derecho del Trabajo en España. Tomo I. 1981. P776

luminaria de la justicia, entendida esta como un Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.

SEGUNDO.- Con respecto a la interpretación y aplicación de las normas laborales en la resolución de los conflictos de la justicia de Trabajo, se señala que: “*Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley*”, esto de conformidad con lo expresamente establecido por el artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497. Por otro lado, es pertinente resaltar, en primer lugar, el valor de la *Oralidad* dentro de la dinámica que encierra el nuevo procesal laboral, puesto que la sola presencia física de determinados documentos en el expediente judicial no, necesariamente, importa su enjuiciamiento y valoración si es que no fueron oralizados y/o explicados por la parte que los ofrece o postula (interesado) durante el momento estelar del proceso, esto es, la audiencia de juzgamiento, ello merced a la real y efectiva influencia de la oralidad en el proceso laboral (sentido fuerte de la oralidad), la misma que se pone de especial manifiesto en relación a la prueba. En ese sentido, la oralidad como característica fundamental de los procesos laborales ha sido enfática y reiteradamente recomendada por la doctrina. Por consiguiente, el objetivo fundamental de que se actúe ante el Magistrado de palabra y por medio del debate laboral es facilitar su contacto directo con las partes y las pruebas, lo que permitirá la mejor averiguación del supuesto fáctico, así como la más clara fijación de las pretensiones de las partes. Oralidad y medios de prueba están estrechamente vinculados.

TERCERO.- Resulta necesario recalcar, además, que si bien el proceso laboral se rige por el *Principio de Veracidad*; esto es, que existe el imperativo de resolver en base a la realidad de los hechos; no es menos cierto que, la falta de colaboración de las partes en la actuación de los medios probatorios aportados al proceso, permite traer a colación: por un lado, que el nuevo esquema y diseño del proceso laboral, trae consigo *presunciones legales y judiciales* y que constituyen una de las manifestaciones del principio protector en el terreno del Derecho Procesal del Trabajo y que se orienta a *flexibilizar* – y en ocasiones está destinada a invertir – las cargas probatorias impuestas, atendiendo a la condición de *hipo suficiencia* probatoria de la parte demandante. No podemos dejar de mencionar que el principio de veracidad también tiene su correlato fáctico en la conducta procesal de las partes, pues supone la

primacía de la orientación publicista del Derecho Procesal, en buena cuenta que la veracidad, la lealtad, la buena fe y la probidad constituyen exigencias en aras de una moralización del proceso. Los valores señalados no son sino reglas de conducta que deben estar presente durante todo el desempeño de las partes dentro de un proceso, debiendo estas y sus abogados encuadrar sus conductas dentro de las reglas ya señaladas.

Cabe aquí resaltar lo que dice el autor nacional Oxal⁴ Avalos Jara con respecto al principio de veracidad: *“Consideramos que el principio de veracidad extiende sus alcances también a la actividad probatoria en el sentido que, prima facie, debe asumirse de que todo lo aportado por las partes es veraz en la medida que no se demuestre lo contrario. De esta forma, si alguna de la partes puede acreditar que cierto hecho se sustenta en hechos falsos, este principio quedaría de lado, dando paso a lo real y certero”*.

DEBIDA MOTIVACION DE RESOLUCIONES

CUARTO.- Nuestra Constitución Política del Estado señala en el inciso 5 de su artículo 139° que son principios y derechos de la función jurisdiccional *“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”*. En ese sentido, la debida motivación de resoluciones es un principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es, a su vez, un derecho humano fundamental de los justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones pertinentemente propuestas. En esa línea de razonamiento se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 8125-2005-PHC/TC⁵, de fecha 14 de noviembre de 2005, cuando en su fundamento décimo primero señala lo siguiente: *“En efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que*

⁴ AVALOS JARA, Oxal. “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. Jurista Editores. Junio 2011. Pag. 56. 918 pp.

⁵ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernando Garrido Pinto a favor don Jeffrey Immelt y otros contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.

pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver”.

En función a los fundamentos señalados, este Juzgador está en la obligación de motivar las resoluciones que emita, pues es un imperativo de orden constitucional resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengán planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal; pues, de atentar contra el derecho a la debida motivación de las sentencias, se estaría vulnerando también el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables.

RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

QUINTO.- Resulta necesario resolver la Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa formulada por la entidad demandada; por lo que, corresponde emitir el pronunciamiento respectivo, así veamos:

- a) El representante de la B, mediante escrito que obra en autos de folios 146 a 150, deduce Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa, conforme a los fundamentos oralizados en Audiencia Única, siendo registrado en formato de audio y video. Por su parte, la defensa técnica de la parte demandante absolvió la misma.
- b) Al respecto, debe señalarse que la Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa viene a ser un mecanismo procesal de defensa cuyo fin es privilegiar la situación de auto tutela administrativa, antes de optar por la tutela jurisdiccional por parte del administrativo, establecido en el artículo 20° del Decreto Supremo N° 013-2008-IUS, Texto Único Ordenado de la Ley Contencioso Administrativo, señala que es requisito para la procedencia de la demanda, el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la ley del procedimiento administrativo general o por las normas especiales.
- c) En fecha 07 de julio del presente año, la Sala Mixta de esta Corte Superior emitió Sentencia de Vista, contenida en resolución número ocho, ordenando a este Juzgador pronunciarse sobre la naturaleza de los contratos celebrados entre el actor y la demandada,

y de ser el caso, disponer el pago de los beneficios sociales que conforme a ley le corresponderían, por lo que resulta de imperiosa necesidad para resolver la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa determinar previamente la naturaleza de la relación laboral entre las partes.

d) Señala el actor que sus labores son de mantenimiento y funcionamiento de la cámara de bombeo ubicada en la urbanización popular Nueva Sullana del distrito y provincia de Sullana. Por otro lado, la entidad demandada, entre sus fundamentos que sustentan la excepción señala que con el caso cesar Antonio Baylón Flores perteneciente al expediente N° 0206-2005-P/TC en su fundamento 21, señala lo siguiente: *“Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de la Administración Pública. Por ello, el artículo 4° literal 6° de la Ley N° 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares”*.

e) Si bien es cierto, los obreros municipales son identificados mayormente con el personal que hace labores de limpieza, choferes y serenazgo, pero ello no implica que se trate de una clasificación *numerus clausus* (Traducción al español: relación cerrada), pues la principal característica de este grupo de trabajadores es que sus labores sean: a) no calificado, vale decir, manual; y, b) fuera de oficina, vale decir, en campo (en término del vulgo sería *“fuera de escritorio”*). En ese sentido, los trabajadores denominados obreros municipales deben reunir esas dos características –de manera copulativa– en el desempeño de sus labores, esto con el fin de ser comprendidos en el artículo 37° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

f) En el caso en concreto el actor realiza labores de mantenimiento y funcionamiento de la cámara de bombeo, labor que no requiere de una especialización, y si bien es cierto, todo trabajo requiere de un proceso de adaptación y aprendizaje consustanciales no solo a la labor en si, sino también al medio en que uno las lleva a cabo, ello no implica que la labor que realiza el demandante requiera de un grado de experiencia técnico como señala la

entidad demandada, menos aún si la defensa técnica de la B no ha demostrado cuales serían esos conocimientos técnicos para llevar a cabo la función de mantenimiento y funcionamiento de la cámara de bombeo.

g) Así las cosas, si el conflicto jurídico se produce dentro del régimen laboral de la actividad pública es el proceso contencioso administrativo la vía procesal adecuada para resolver dichos asuntos jurídicos, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Empero, para el caso de los conflictos jurídicos que se derivan del régimen laboral privado es el proceso laboral la vía procesal adecuada para resolver dichas causas de conformidad con la vigente Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo. En ese orden de ideas, y sin perjuicio de pronunciarnos más adelante nuevamente sobre la naturaleza de las labores del actor, este Juzgador determina que las labores que lleva a cabo el demandante corresponden a las de un obrero municipal por las consideraciones ya señaladas, al amparo de lo dispuesto por el artículo 37° de la citada Ley N° 27972 que señala “*Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen*”; en tal sentido corresponde declarar **INFUNDADA** la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa deducida por la B.

PRETENSIONES SOBRE LAS CUALES CORRESPONDE EMITIR PRONUNCIAMIENTO

SEXTO.- Corresponde en este punto señalar las pretensiones sobre las cuales corresponde emitir pronunciamiento, y que vienen a ser las siguientes:

- 1) *Determinar la verdadera naturaleza de los contratos celebrados entre el actor y la entidad demandada.*
- 2) *Determinar si le corresponde el pago de beneficios sociales: Compensación por tiempo de Servicios, Vacaciones y Gratificaciones por el periodo comprendido desde 03.09.2012 hasta el 23.03.2015. Además de pago de remuneraciones correspondiente, pago de asignación familiar, pago de horas extras y pago por trabajo en domingos y feriados.*

PUNTOS FUNDAMENTALES PARA RESOLVER LA CAUSA

SETIMO.- Es de imperiosa necesidad para la presente causa el determinar la naturaleza de

los contratos celebrados entre el actor y la demandada, y de ser el caso, disponer el pago de los beneficios sociales que conforme a ley le corresponderían, tal y como ha señalado Sala Mixta de esta Corte Superior en el fundamento sétimo de la Sentencia de Vista contenida en la resolución número ocho. En ese sentido el órgano jurisdiccional está en la obligación de llevar a cabo una exhaustiva y razonada investigación, esto con el objeto de averiguar la verdad material (y objetiva) y las circunstancias en que se dieron los hechos, lo cual inspira la trascendencia de la función jurisdiccional, y realza la labor del Juez motivándolo en su tarea de buscar la tan ansiada realidad fáctica, ello por aplicación del Principio de Veracidad previsto en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, y que en palabras del Magistrado Javier Arévalo Vela⁶ “(...) *el juez debe buscar la verdad de los hechos entre lo que manifiestan las partes, que es su versión de los mismos, información que siempre no es veraz, ó sea por un error de apreciación por parte de quien litiga de buena fe, pero equivocado respecto a los hechos o al derecho; ó sea porque una de las partes pretende inducir al error al juez con informaciones falsas o distorsionadas*”. En ese sentido, Lo que se busca finalmente es hacer que prevalezca la verdad real sobre la verdad formal o aparente.

DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA RELACION JURIDICA ENTRE EL ACTOR Y LA DEMANDADA Y LA DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS

OCTAVO.- Resulta necesario determinar en este acápite de la Sentencia si los contratos celebrados entre las partes se han desnaturalizado, por lo que corresponde desplegar el siguiente análisis jurídico:

a) Señala el actor que viene laborando para la B desde el 03 de setiembre de 2012 con contratos de Locación de Servicios N° 1179-2012/MPS-GAJ, de fecha 31.10.12, donde recibía un salario de S/. 600.00, previa presentación de recibos por honorarios. Posteriormente el 26 de noviembre del 2012 se realizó el segundo contrato por Locación de Servicios, por el periodo de 03 meses a partir de octubre de 2012 hasta diciembre de 2012, con un salario de S/ 800.00 que mantiene a la actualidad.

⁶ AREVALO VELA, Javier. “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. Editorial Rhodas. Lima. 2da. Edición. Mayo 2013. Pag. 13. 461 pp.

b) La entidad demandada señala que el actor efectuó trabajos como prestación personal a través de fichas de mantenimiento, no existiendo relación laboral con el demandante. Asimismo, señala que el Estado puede en función a sus necesidades de cada ente orgánico, tal como lo son las comunas, contratar de forma directa, tal como lo establece el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

c) Ahorabien, el accionante mencionó en su escrito de demanda que en la actualidad sigue vinculado con la demandada bajo un contrato de locación de servicios, y que si bien es cierto en la demanda no se petitionó de forma expresa la desnaturalización de la contratación de naturaleza civil entre el accionante y la demandada **B**; también es cierto que, dicha entidad tuvo la oportunidad de ejercer su defensa de forma libre, amplia y voluntaria. En esa coyuntura, y teniendo en cuenta el debate oral realizado oportunamente, éste Juzgador considera pertinente examinar si dicha contratación fue lícita o no, dado que el *thema decidendum* fue materia de controversia y contradictorio.

d) Si bien es cierto, la entidad demandada ha señalado que el actor ha sido contratado bajo la figura contractual de Locación de servicios –y en el supuesto negado de lo señalado, el personal empleado está sujeto al régimen laboral de la actividad pública bajo el imperio del Decreto Legislativo 276–, no se puede negar que ha existido una prestación personal, hecho que se encuentra debidamente acreditado por el actor. Ello se colige del artículo 23.2 de la Ley 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo que prescribe lo siguiente: “*Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario*”. En ese sentido, al actor solo le incumbe demostrar únicamente la existencia de una prestación personal, mas no una prestación de servicios subordinados. Por otra parte y con respecto a su demostración en contrario, la carga de la prueba le corresponde a la demandada por haber sido señalada como empleadora, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497, el cual establece que: “*De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:*

a) *El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad (...)*”. Máxime que, la primera parte de dicho artículo 23.1 establece que: “*La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice*”, la cual corresponde

a la máxima que *“quien alega un hecho tiene que probarlo”*, la misma que es concordante con el artículo 188° del Código Procesal Civil, que señala: *“Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes”*. Pues bien, corresponde determinar si en la contratación llevada a cabo por la entidad demandada estuvieron presentes los tres elementos esenciales del contrato de trabajo:

Prestación personal, conocida en la doctrina como prestación *Intuito Personae*, elemento esencial del contrato de trabajo, según la cual la prestación del trabajo debe ser de manera personalísima, sin intermediarios, debe ser prestado directamente por la persona contratada. En ese sentido, ha quedado acreditado en autos que el actor ha brindado una prestación personal, hecho no negado por la entidad demandada; **Remuneración**, al respecto Jorge Toyama Miyagusuku⁷ nos precisa que este elemento esencial del contrato de trabajo *“es la*

obligación del empleador de pagar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad que este pone a su disposición”. En nuestra legislación, el artículo 6° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728 prescribe que *“constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición”*. En caso de autos se encuentra debidamente acreditada la presencia de este elemento, pues se verifica de folios 01 a 21 y de folios 23 a 55 la presencia de recibos por honorarios y de cheques que evidencian la presencia de una remuneración por el trabajo efectuado, mal denominada por la entidad demandada honorarios profesionales; **Subordinación**, viene a ser, en palabras de Javier Neves Mujica, el *“vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo, en virtud del cual el primero le ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla”*. A dicho poder de conducción o dirección, se le debe agregar el poder reglamentario y el poder disciplinario, en ese orden de ideas, se adhiere el artículo 9° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, el cual señala que por la subordinación: *“el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para su ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier*

⁷ TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El Principio de Primacía de la Realidad (...) entre la Subordinación y la Autonomía”. En: Revista Jurídica del Perú. Edición N° 30, enero del 2002, Lima, página

132.

infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador". Nuevamente, señalamos que en caso de autos este elemento se encuentra debidamente acreditado con los informes enviados por el actor a la B, y que obran en autos de fojas 80 a 105, más aun si verificamos que del informe 001-2015 de fecha de recepción 05.01.2015 (de folios 87 a 88) se verifica que informan a la Gerencia de Desarrollo Urbano de las condiciones en las que trabajan, informando de la siguiente manera: *"Con respecto a las condiciones en las que trabajamos, son de total precariedad ya que no contamos ni con los mínimos accesorios de seguridad como lo puedo constatar el mismo Gerente Municipal y el señor Ricardo Palacios, lo cual nos está generando problemas de salud como son los dolores de cabeza y gastrointestinales"*, evidenciando con ello una relación de dependencia y subordinación, pues está demostrando el actor que las labores llevadas a cabo no son por su cuenta y riesgo, sino todo lo contrario, dependen de un ente superior que cumple el papel de empleador, pues, de los informes se evidencia que el actor le informa a la demandada de las condiciones en las que lleva a cabo el trabajo para la cual fue contratado. Cabe aquí hacer mención en toda su magnitud al Principio de Primacía de la Realidad, según la cual en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. El maestro uruguayo Américo Pla⁸, citando al jurista mexicano Mario de la Cueva, señala lo

siguiente: *"La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieran pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponde a la realidad, carecerán de todo valor"*.

e) Por otro lado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 37° de la citada Ley N° 27972 que señala *"Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen"*, se ha logrado determinar que las labores efectuadas por el actor son las correspondientes a las de un obrero, pues, la principal

⁸ PLA RODRIGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo. 2da. Edición. Ediciones De Palma. Buenos Aires. 1978. Pag. 244.

característica de este grupo de trabajadores es que sus labores sean: a) no calificado, vale decir, manual; y, b) fuera de oficina, vale decir, en campo (en término del vulgo sería “*fuera de escritorio*”). En ese sentido, los trabajadores denominados obreros municipales deben reunir esas dos características –de manera copulativa– en el desempeño de sus labores, características que se encuentran presentes en las labores del actor.

f) Bajo esa línea de análisis, el actor ha demostrado fehacientemente que ha efectuado labores de manera permanente, personal y subordinada para la entidad demandada, pues, se tiene que las labores efectuadas como lo viene a ser las de mantenimiento y funcionamiento de la cámara de bombeo se desarrollan bajo órdenes impartidas por un personal superior que supervisa las labores, y que trae como consecuencia jurídica inmediata la desnaturalización de la relación contractual establecida entre las partes. Así las cosas, se tiene que entre el actor y la demandada B existe, desde su inicio, una verdadera relación laboral producto de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, esto al amparo del artículo 4° del Decreto Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala lo siguiente: “*En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece (...)*”. En ese sentido, se tiene que los contratos de locación de servicios celebrados entre las partes se encuentran desnaturalizados por los fundamentos ya expuestos, por consiguiente se le debe aplicar las normas laborales concernientes al régimen laboral de la actividad privada contenidas en el ya señalado Decreto Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, declarándose la relación contractual existente en la de un contrato de trabajo a plazo indeterminado.

DETERMINACION DEL PAGO DE HORAS EXTRAS. Y DE LABORES EN DIAS DOMINGOS Y FERIADOS

NOVENO.- Señala el actor que no se le canceló el pago de horas extras. Con respecto a este concepto tenemos que el actor no ha señalado la cantidad de horas extras diarias que ha laborado, ni mucho menos con qué porcentaje se le deberían cancelar. Al respecto debemos

tener en cuenta que el trabajo en sobretiempo tiene una naturaleza extraordinaria por consiguiente su probanza se regirá conforme a las reglas generales de probanza ya señaladas, teniendo como base el artículo 23.1 que establece lo siguiente: *“La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice”*, la cual corresponde a la máxima que *“quien alega un hecho tiene que probarlo”*, concordante con el artículo 188° del Código Procesal Civil, que señala: *“Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes”*. En tal sentido, no habiendo acreditado el actor la existencia de horas extras dicho extremo de su demanda no puede ser amparado, por lo que corresponde declarar infundado el pago de horas extras.

Lo mismo sucede con el trabajo en días domingos y feriados alegados por el actor, pues, no hay forma de acreditar que hubo trabajo efectivo en tales días, ello debido, a que como ya explicara, se trata de jornada extraordinaria que incumbe al demandante la carga probatoria, y al no poder acreditar con otros medios su existencia no podemos determinar que efectivamente hubo trabajo en días domingos y feriados mediante presunciones legales. Incluso, para poder aplicar la presunción legal contenida en el artículo 29° de la Ley 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, en el sentido de extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso, se debe obtener indicios suficientes que conlleven a determinar la existencia de las horas extras y del trabajo en días domingos y feriados.

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES: COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES

DECIMO.- Habiéndose determinado la verdadera naturaleza de la relación contractual entre el actor y la demandada, esto es, una de naturaleza laboral bajo el imperio del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, corresponde en este extremo de la sentencia determinar el pago de los beneficios sociales del actor, esto es: Compensación por tiempo de servicios, Vacaciones y Gratificaciones. En ese sentido, se tiene que la remuneración y los beneficios sociales reconocidos al trabajador tienen prioridad sobre cualquier obligación del empleador, ya que son derechos constitucionales establecidos en el artículo 23° de la Constitución. Así nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución por lo que tal derecho constitucional no puede ser puesto en cuestión en la relación laboral siendo que cualquier acto que conduzca a limitar el ejercicio del derecho constitucional que antecede, puede generar el reclamo atendible por el trabajador, por

atentar contra una norma de orden público de mayor rango, como es la constitucional (Casación N° 716-2002-Piura). Bajo ese orden de ideas, este Juzgador procede a liquidar los siguientes beneficios sociales:

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

El actor demanda el pago de este beneficio social, y alega que nunca se le abonó. La Compensación por tiempo de Servicios es el beneficio social más característico de nuestro ordenamiento laboral; constituye un elemento de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo para el trabajador y su familia. Tienen derecho a percibirla todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que cumplan cuando menos en promedio una jornada ordinaria de cuatro horas diarias. En los casos en que la jornada semanal del trabajador, dividida entre seis o cinco días, según corresponda, resulte en promedio de no menos de cuatro horas diarias, el requisito a que se refiere el párrafo anterior se considerará cumplido cuando el trabajador labore veinte horas a la semana; todos estos requisitos que han sido superados por el trabajador en su jornada de trabajo establecida.

Asimismo, no está en discusión si a la parte demandante le corresponde o no el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, pues al haberse establecido la existencia de una relación laboral entre el actor y la demandada resulta evidente que si le corresponde percibir este beneficio. Bajo esa línea de razonamiento este beneficio social no puede ser desconocido por la ex empleadora. Ahora bien, por el periodo que duró la relación laboral está vigente el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 650, el mismo que prescribe en su artículo 9° que: *“Son remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se le dé, siempre que se ande su libre disposición”*.

Con respecto a la remuneración computable para determinar los depósitos semestrales se tiene que el reintegro de este beneficio social se debe abonar en base a la remuneración histórica, es decir, al monto dinerario que percibía el demandante al momento en que le correspondían efectuar el depósito y no en base a la última remuneración, esto según la Casación N° 1197-2001-ICA. Bajo el criterio establecido procedemos a efectuar el siguiente cálculo por el periodo comprendido desde 03.09.2012 hasta el 23.03.2015:

REMUNERACIÓN INDEMNIZABLE: (CESE)

Remuneración Mensual : S/ 800.00 +
Promedio gratificación : 133.30

TOTAL : **S/ 933.30**

D COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS: CTS

BASE LEGAL; Decreto Supremo N° 001-97-TR.

CTS. SEMESTRAL:

RIMER PERIODO: RI S/ 800.00 + 133.30 = S/ 933.30

Del: 03-09-12

Al: 31-10-12 S/ 933.30 x 01/12 = S/ 77.80 +

T.S. 01 m, 28 d. 933.30 x 28/360 = 72.60 = **S/ 150.40**

SEGUNDO PERIODO: RI S/ 800.00 + 133.30 = S/ 933.30

Del: 01-11-12

Al: 30-04-13 S/ 933.30 x 06/12 = **S/ 466.60**

T.S. 06 m.

TERCER PERIODO: RI S/ 800.00 + 133.30 = S/ 933.30

Del: 01-05-13

Al: 31-10-13 S/ 933.30 x 06/12 = **S/ 466.60**

T.S.: 06 m.

CUARTO PERIODO: RI S/ 800.00 + 133.30 = S/ 933.30

Del: 01-11-13

Al: 30-04-14 S/ 933.30 x 06/12 = **S/ 466.60**

T.S.: 06 m.

QUINTO PERIODO: RI S/ 800.00 + 133.30 = S/ 933.30

Del: 01-05-14

Al: 31-10-14 S/ 933.30 x 06/12 = **S/ 466.60**

T.S.: 06 m.

SEXTO PERIODO: RI S/ 800.00 + 133.30 = S/ 933.30

Del: 01-11-14

Al: 23-03-15 S/ 933.30 x 04/12 = S/ 311.10 +

T.S.: 04 m, 22 d. 933.30 x 22/360 = 57.00 = **S/ 368.10**

TOTAL: SUMADOS LOS 06 PERIODOS ARROJAN: S/ 2,384.90

Corresponde al actor recibir la suma de S/. 2,384.90 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO SOLES CON 90/100 CENTIMOS) por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios.

VACACIONES

Corresponde resolver la pretensión de pago de las vacaciones y su indemnización, para lo cual se debe efectuar el siguiente análisis jurídico:

La parte demandante pretende el pago de vacaciones no gozadas y su correspondiente indemnización vacacional, esto es, por no haberlas gozado físicamente dentro del periodo correspondiente. Al respecto, se denominan vacaciones al lapso de tiempo en que los trabajadores toman un descanso o un receso en su actividad luego de cada período de trabajo—normalmente un año. Claro está, se exceptúa de dicho concepto a los días feriados, días no laborables y a los días de descanso semanal. Es por eso que, las vacaciones también se les conoce como descanso anual; en esa perspectiva, el maestro José Montenegro Baca⁹ sostiene que las vacaciones son: *“El derecho del trabajador a suspender la prestación del servicio en la oportunidad señalada por la ley, sin pérdida de remuneración habitual, con el fin de atender a los deberes de restauración orgánica y de las disposiciones legales”*, por su parte, el profesor argentino Julián Arturo de Diego¹⁰ indica que: *“es un periodo de descanso continuo y remunerado, otorgado anualmente por el empleador al trabajador, con el fin de contribuir a la recuperación psicofísica del trabajador y de que comparta un lapso razonable en forma ininterrumpida consu familia”*.

⁹ MONTENEGRO BACA, José. “Jornada de trabajo y descansos remunerados”, tomo I, Lima, 1959, pág. 436.

¹⁰ DE DIEGO, Julián Arturo. “Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, editorial AbeledoPerrot, 5° edición, Buenos Aires – Argentina, 2002, pág. 415.

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 713 – Ley de Descansos Remunerados, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-92-TR, reconocen el derecho de los trabajadores a treinta días calendarios de descanso físico vacacional por cada año completo de servicios; vale decir, se tiene la concepción que las vacaciones viabilizan la reparación de energías; sin embargo, es factible que en dicho periodo el trabajador puede desarrollar su personalidad en la forma que lo considere adecuada, en base a su dignidad como persona humana.

Con respecto a la remuneración base de referencia para el cálculo de las vacaciones se tiene lo prescrito por el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 713, la cual señala que será la remuneración que se encuentre percibiendo en la oportunidad que se efectúe el pago; esto es, la remuneración computable para determinar las vacaciones debe determinarse en función a la remuneración vigente a la fecha de pago y no sobre la histórica. Bajo el criterio establecido procedemos a efectuar el siguiente cálculo por el periodo comprendido desde 03.09.2012 hasta el 23.03.2015:

VACACIONES NO PAGADAS.-

BASE LEGAL.- art. 22-23 del Decreto Legislativo N° 713°

Periodo: 2012-2013 Pago Doble: S/ 800.00 x 02 = S/ 1,600.00 +

Periodo: 2013-2014 Pago Simpl: S/ 800.00 x 01 = S/ 800.00 =
S/ 2,400.00 +

VACACIONES TRUNCAS: 06 meses, 20 días.

S/ 800.00 x 06/ 12 = S/ 400.00 +

800.00 x 20/360 = 44.40 = S/ 444.40 = **S/ 2,844.40**

Corresponde al actor recibir la suma de S/. 2,844.40 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO SOLES CON 40/100 CENTIMOS) por concepto de Vacaciones no pagadas y trucas.

GRATIFICACIONES

Con respecto a este extremo corresponde a este Juzgador resolver la pretensión de pago de gratificaciones, para lo cual se debe efectuar el siguiente análisis jurídico:

La parte demandante peticiona el pago de las Gratificaciones por el periodo comprendido desde 03.09.2012 hasta el 23.03.2015. Al respecto, las Gratificaciones resultan ser derechos laborales que se perciben 02 veces al año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad, ello conforme se puede verificar del artículo 1° de la Ley N° 27735, la cual es la norma positiva que tiene regulación una vigente acerca de las gratificaciones en nuestro país. Este beneficio resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador, siempre que hubiera laborado como mínimo un mes integro de servicios en el semestre correspondiente. Bajo el análisis planteado, este Juzgador procede a realizar la siguiente liquidación:

GRATIFICACIONES.-

BASE LEGAL: La Ley N° 25139 y 27735

BASE LEGAL: Ley N° 29351 (Se aplica el 9 % a las Gratificaciones Julio y Diciembre)

(A partir de Julio de 2009)

Julio 2012: S/ 581.30 (4/6) Diciembre 2012: S/ 872.00

Julio 2013: S/ 872.00 Diciembre 2013: S/ 872.00

Julio 2014: S/ 872.00 Diciembre 2014: S/ 872.00

S/ 2,325.30 + S/ 2,616.00 = **S/ 4,941.30**

Corresponde al actor recibir la suma de S/. 4,941.30 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO SOLES CON 30/100 CENTIMOS) por concepto de

Gratificaciones.

DETERMINACION DE REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

DECIMO PRIMERO.- Señala el actor que se le adeudan las remuneraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2014, y enero, febrero y marzo del año 2015. Sin embargo, mediante escrito de fecha 03 de junio del presente año, mediante se apersona a la Instancia informando a Sala, señala en su numeral cuarto que la B le ha cancelado sus remuneraciones hasta el mes de Octubre de año 2015, pagos que realizó

la primera semana de febrero del presente año. En ese sentido, su pretensión sobre el pago de su remuneración por los periodos indicados en su demanda deviene en infundado, pues ya fueron cancelados con anterioridad.

DETERMINACION DEL PAGO DE ASIGNACION FAMILIAR

DECIMO SEGUNDO.- Señala el actor que a la fecha de interposición de su demanda le adeudan el pago concerniente a la Asignación Familiar. Mediante Decreto Supremo 035-90- TR, Reglamento de la Ley 25129, se otorgó el concepto remunerativo de Asignación Familiar para los trabajadores de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva equivalente al 10% del ingreso mínimo legal. Son requisitos para tener derecho a percibir la asignación familiar, tener vínculo laboral vigente y mantener a su cargo uno o más hijos menores de dieciocho años. Asimismo, Los trabajadores tendrán derecho a percibir dicha asignación familiar hasta que los hijos cumplan dieciocho años de edad, salvo que éstos se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, en cuyo caso se extenderá este beneficio hasta la culminación de los mismos, por un máximo de seis años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. El artículo 11° del Decreto Supremo en mención señala lo siguiente: *“El derecho al pago de la asignación familiar establecida por la Ley, rige a partir de la vigencia de la misma, **encontrándose obligado el trabajador a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere**”* (El resaltado es mío). Es del caso que el actor no ha acreditado con medio de prueba indubitable (partida de nacimiento en este caso) tener hijos menores de edad o que se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, por lo que este extremo de la demanda deviene en infundado.

MONTO TOTAL A CANCELAR AL ACTOR

Conceptos	Montos
C.T.S.	S/ 2,384.90
Gratificaciones	S/ 2,844.40

DECIMO

monto total que la
debe abonar a favor del

Vacaciones	S/ 4,941.30
Total	S/ 10,170.60

TERCERO.-

El
entidad demandada
demandante por

concepto de Compensación por tiempo de Servicios, Vacaciones y Gratificaciones, asciende a la suma de S/ 10,170.60, los mismos que pasamos a detallar en el siguiente cuadro:

DETERMINACION DE LAS PRETENSIONES DE PAGO DE LOS INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS PROCESALES:

DÉCIMO CUARTO.- Con respecto a este extremo de la demanda (pago de los Intereses Legales, Costas y Costos Procesales), este Juzgador debe precisar lo siguiente:

RESPECTO A LOS INTERESES LEGALES:

Cabe señalar que corresponde el pago de los **intereses legales** del proceso cuando se determine y declare la existencia de adeudos laborales. Así las cosas, se debe precisar que los intereses legales se calculan de acuerdo el artículo 3° del Decreto Ley N° 25920, precepto legal que prescribe que el interés legal se calcula sobre los montos adeudados por el empleador, los cuales se devengan a partir del día siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día en que se produce su pago efectivo. Del mismo modo, cabe agregar que los intereses legales deben determinarse aplicando la tasa de interés legal, establecido periódicamente por el Banco Central de Reserva, esto acorde con el artículo 1° del Decreto Ley señalado anteriormente, además del artículo 1244° del Código Civil.

Con respecto a los intereses legales derivados de vacaciones adeudadas, en las que se utiliza la última remuneración, se tiene que efectuar un método de cálculo distinto, dado que se está realizando en buena cuenta una actualización de remuneraciones. En ese orden de ideas, debemos recurrir a lo establecido en el Acuerdo N° 03-99 del Pleno Jurisdiccional Laboral 1999, que señala lo siguiente: “a) Si se ha producido el cese, el pago de la remuneración

vacacional adeudada se efectúa con la remuneración vigente a la fecha de éste más los intereses legales que se generen a partir del día siguiente del mismo, y hasta el día de su pago efectivo. De no haber ocurrido incremento de remuneraciones desde el vencimiento de la oportunidad del goce del descanso vacacional hasta la del cese del trabajador, entonces procederá el pago de intereses desde el día siguiente en que ocurrió dicho Incumplimiento”. Lo señalado se aplica cuando no exista el vínculo laboral vigente.

RESPECTO AL PAGO DE COSTAS:

Respecto a este derecho se debe señalar que le corresponde a la parte accionante porque se ha determinado la existencia de créditos laborales a su favor, por lo que su cuantía se determinará en la forma prevista en nuestro ordenamiento procesal vigente, conforme lo establece el artículo 410° del Código Procesal Civil, precepto legal que señala lo siguiente: *“Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso”,* los mismos que serán liquidados en ejecución de sentencia.

RESPECTO DEL PAGO DE COSTOS DEL PROCESO (PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES)

Respecto a la pretensión de Reconocimiento del pago de Honorarios Profesionales que se pagan con ocasión del proceso, para lo cual se debe realizar el siguiente análisis:

Los Honorarios Profesionales vienen a ser los Costos procesales, esto acorde con el artículo 411° del Código Procesal Civil, en cuanto prescribe que: *“Son costos del proceso el **honorario del Abogado de la parte vencedora**, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial”.*

Ahora, para lograr determinar el quantum de los Honorarios Profesionales se debe realizar una estimación razonable de diversos conjuntos y parámetros legales así como fácticos que puedan presentarse durante el desarrollo del proceso, tales como la duración, la naturaleza y complejidad de la misma, el importe ordenado a pagar por el órgano jurisdiccional (sumas liquidadas o liquidables), teniéndose muy en cuenta la calidad de la defensa en la estructuración de la teoría del caso y de la forma en que ésta ha sido traducida en las actuaciones procesales, pero también en la calidad de la litigación del abogado en el marco del

nuevo proceso laboral.

En ese orden de ideas, para la determinación de los honorarios profesionales dentro del nuevo modelo de proceso laboral, se debe determinar de manera objetiva si el letrado ha llevado una buena defensa de los intereses de su patrocinado, de modo tal que se justifique el pago de los honorarios que han señalado en la demanda y que forman parte de su pretensión, el cual asciende al 30% del petitorio principal. En este caso, se observa tales características de forma irregular, por cuanto la redacción de la demanda presenta deficiencias en cuanto a su argumentación. En ese sentido, los Costos Procesales deben ser determinados en la suma de S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS SOLES Y 00/100), más el 5% de este monto para el Colegio de Abogados de Sullana, esto es, la suma de S/ 125.00 soles.

CAMBIO DE UNIDAD MONETARIA DE NUEVO SOL A SOL:

DECIMO SETIMO.- En fecha 14 de diciembre del 2015 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30381, mediante la cual se dispuso en su artículo 1° establecer el cambio de nombre de la unidad monetaria del Perú de Nuevo Sol a Sol, así como su signo monetario, reemplazándose S/. por S/, esto con el fin de dinamizar las transacciones económicas y adecuarlas a la realidad de nuestra sociedad. En tal sentido, dicha norma jurídica se debe aplicar en la presente Sentencia, por lo que se utiliza la nueva unidad monetaria: Sol.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 138° y 143° de la Constitución Política del Estado y el artículo 51° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impartiendo Justicia a nombre de la Nación: el **JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE SULLANA:**

FALLA:

1. **DECLARANDO FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por **A**, contra **B**, sobre **DESNATURALIZACION DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS Y PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.**

En consecuencia:

2. **DECLARO FUNDADO** el extremo de la demanda en el cual se pretende

implícitamente la desnaturalización de los contratos de locación de servicios entre el actor y la demandada; en consecuencia, **DECLARO** la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado bajo el imperio de las normas laborales regidas por el Decreto Legislativo 278 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral entre la demandada **B** y **A**.

3. **DECLARO FUNDADO** el extremo de la demanda en el cual se pretende el pago de **BENEFICIOS SOCIALES**; en consecuencia, **ORDENO** que la demandada **B** cumpla con cancelarle al accionante **A** la suma ascendente a **S/ 10,170.60 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA SOLES Y 60/100 CENTIMOS)**, dentro del quinto día hábil de notificada con la presente sentencia. Asimismo, **ORDENO** la cancelación de los intereses legales generados desde la fecha de interposición de la presente demanda, los mismos que serán calculados en ejecución de sentencia.

4. **DECLARO INFUNDADA** el extremo de la demanda en el cual se pretende el pago de **HORAS EXTRAS, LABORES EN DIAS DOMINGO Y FERIADOS, PAGO DE REMUNERACIONES PENDIENTES Y ASIGNACION FAMILIAR**

5. Asimismo, se determinan los **COSTOS PROCESALES** a favor de la parte accionante, en la suma de **S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS SOLES Y 00/100 CENTIMOS)**, más el **5%** de este monto para el Colegio de Abogados de Sullana, esto es, la suma de **S/ 125.00** soles. **CON** Costas, las que serán liquidadas en ejecución de sentencia. **SIN** Multa.

6. **ARCHÍVESE** los actuados en el modo y forma de Ley. **NOTIFÍQUESE** a las partes con la presente sentencia conforme a las normas procesales establecidas.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
SALA LABORAL TRANSITORIA DE SULLANA

EXPEDIENTE : 00176-2015-0-3101-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y
REMUNERACIONE

Señores: S., G., E.

SENTENCIA DE VISTA

RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE (14)

Sullana, doce de abril

Del año dos mil dieciocho.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

MATERIA:

PRIMERO.- Materia del Recurso de apelación

El presente proceso judicial se ha remitido a esta Superior Instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia contenida en **la resolución número nueve** de fecha diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis, inserta a fojas 221 a 240, que declara: **1. FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por A, contra B, sobre desnaturalización de contrato de locación de servicios y pago de beneficios sociales. En consecuencia: **2.FUNDADO** el extremo de la demanda en el cual se pretende implícitamente la desnaturalización de los contratos de locación de servicios entre el actor y la demandada; en consecuencia, declaró la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado bajo el imperio de las normas laborales regidas por el Decreto

Legislativo 278 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral entre la demandada B y A. **3. FUNDADO** el extremo de la demanda en el cual se pretende el pago de beneficios sociales; en consecuencia, **ORDENO** que la demandada B cumpla con cancelarle al accionante A la suma ascendente a **S/ 10,170.60** (DIEZ MIL CIENTO SETENTA SOLES Y 60/100 CENTIMOS), dentro del quinto día hábil de notificada

con la presente sentencia. Asimismo, **ORDENO** la cancelación de los intereses 20 legales generados desde la fecha de interposición de la presente demanda, los mismos que serán calculados en ejecución de sentencia. **4. INFUNDADA** el extremo de la demanda en el cual se pretende el pago de horas extras, labores en días domingo y feriados, pago de remuneraciones pendientes y asignación familiar. **5.** Asimismo, se determinan los costos procesales a favor de la parte accionante, en la suma de S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS SOLES Y 00/100 CENTIMOS), más el 5% de este monto para el Colegio de Abogados de Sullana, esto es, la suma de S/ 125.00 soles. CON Costas, las que serán liquidadas en ejecución de sentencia. SIN Multa. **6. ARCHÍVESE** los actuados en el modo y forma de Ley.

NOTIFÍQUESE a las partes con la presente sentencia conforme a las normas procesales establecidas.

SEGUNDO.- Fundamentos de los Recursos de Apelación

La Procuradora Pública de la Municipalidad demandada, mediante escrito de fecha veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, que corre inserto de folios 247 a 251, apela la sentencia venida en grado, alegando básicamente lo siguiente:

a) Que, la recurrida tiene una motivación errada, toda vez que no se ha logrado acreditar que la entidad demandada adeude a la parte demandante suma alguna por concepto de beneficios sociales, tales como compensación por tiempo de servicios, gratificaciones de julio y diciembre, y vacaciones, incluidos intereses legales y costos del proceso e los intereses legales, pues se ha limitado a realizar una descripción escueta de los hechos, haciendo una exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación.

b) Que, en la recurrida se efectúa una incorrecta interpretación de las pruebas ofrecidas tanto por la parte demandante, como por la parte demandada; sin merituar las disposiciones normativas aplicables al caso en concreto, por cuanto se ha efectuado una liquidación en base a las disposiciones legales aplicables al régimen laboral privado, cuando el actor no ha ostentado la calidad de obrero.

c) Que, el actor fue contratado para prestar servicios en una actividad específica como es la de operador de cámara de bombeo instalada en la Urbanización Popular

Nueva Sullana, no ostentado la calidad de obrero municipal, además de no realizar labores predominantemente manuales.

d) Que, el Aquo no ha tenido en cuenta que los servicios prestados por el demandante fueron de carácter civil, pues no se requirió ingreso por concurso público.

e) Que, de acuerdo con el artículo 14° de la Ley N° 29497, concordante con el artículo 413° del Código Procesal Civil, se debe exonerar a la demandada del pago de costas y costos del proceso.

ANÁLISIS:

TERCERO.- Que, el inciso sexto del artículo 139° de la Constitución Política del Estado vigente, concordante con el artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consagra el derecho a la pluralidad de instancias, el cual constituye una de las garantías del debido proceso y, se materializa cuando el justiciable tiene la posibilidad de poder impugnar una decisión judicial, ante un órgano jurisdiccional de Mayor jerarquía y con facultades de dejar sin efecto lo originalmente dispuesto, tanto en la forma como en el fondo; por lo tanto constituye un derecho público-subjetivo incorporado dentro del principio de la libertad de la impugnación.

CUARTO.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, así lo prescribe el artículo 355° del Código Procesal Civil, aplicable al presente proceso en forma supletoria. En merito de este recurso, el juez, tribunal o sala superior que conoce de la impugnación, luego de examinar la resolución del juez de primera instancia, decidirá si confirma, revoca o modifica dicha resolución. En tal sentido, el superior corrige los errores y enmienda injusticias cometidas por el juez inferior y de este modo mitiga, en lo posible, las dudas de los litigantes.

QUINTO.- Asimismo, el principio de "*tantum appellatum quantum devolutum*" implica que, "*el alcance de la impugnación de la resolución recurrida determinará los poderes del órgano A quem para resolver de forma congruente la materia objeto*

del recurso"¹¹; por ende esta Sala Superior deberá resolver en función a los agravios, errores de hecho y derecho, así como el sustento de la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente en su escrito de apelación. A su vez, es indispensable que dicho recurso contenga una fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio fija el *thema decidendum* - la pretensión - de la Sala de Revisión, pues la idea del perjuicio debe entenderse como base objetiva del recurso; por ende, los alcances de la impugnación de la resolución recurrida determinará los poderes de este Tribunal A *quem* para resolver de forma congruente la materia objeto del recurso.

SEXTO.-En el caso que nos ocupa, el actor A Interpone demandada contra la B, a fin de que la demandada cumpla con el pago de *Beneficios Sociales* como son *horas extra, vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, domingos y feriados laborados*, por la suma de S/. 31, 944.76 nuevos soles, más los intereses legales, costas y costos del proceso. Precisando que la actividad que realizaba es de mantenimiento y funcionamiento de la cámara de bombeo ubicada en la Urbanización Popular Nuevo Sullana, en horario de 07:00 am hasta las 07:00 pm, de lunes a domingo, sin que hasta la fecha se le haya cancelado ningún tipo de beneficio social, pese a que se ha desnaturalizado el contrato de locación de servicios.

SÉTIMO.- Siendo así, es menester tener en cuenta que el Derecho del Trabajo por su carácter tuitivo contiene normas, principios e instituciones que son protectores de los derechos del trabajador al que se estima la parte más débil de la relación laboral, siendo algunas de sus manifestaciones más importantes, la constitucionalización del principio de *irrenunciabilidad* de los derechos laborales que recoge el inciso 2) del artículo 26° de la Constitución, imponiendo el deber de su tutela jurisdiccional como lo establece el artículo III del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo N° 29497 y en el ámbito procesal, el principio de la *inversión de la carga de la prueba* en virtud del cual, acreditado el vínculo laboral por el trabajador recae a su vez, sobre el empleador,

¹¹ Jaime Solé Riera. "Recurso de apelación". En: Revista Peruana de Derecho Procesal; Marzo de mil novecientos noventa y ocho, página quinientos setenta y uno.-

la carga de la prueba del cumplimiento de sus obligaciones legales y convencionales entre otras conforme a lo dispuesto por el numeral 4, párrafo a del artículo 23 de la Ley Procesal del Trabajo – Ley 29497; lo que se justifica no sólo porque el empleador permanece en poder de la mayoría del caudal probatorio sobre las condiciones y circunstancias específicas en que se desarrolla el vínculo laboral sino que la desigualdad real existente entre empleador y trabajador se traslada al interior del proceso y coloca a este último en una suerte de “*desventaja probatoria*” que es necesario equilibrar.

OCTAVO.- Ahora bien, en el presente caso la parte demandada interpone recurso de apelación, esgrimiendo como uno de sus agravios, que no se ha logrado acreditar que adeude al actor suma alguna por los conceptos de beneficios sociales, incluidos los intereses legales, costas y costos, refiriendo que al respecto el *A Quo* se ha limitado a hacer una descripción escueta de los hechos; ante tal afirmación es necesario precisar que tal como se ha señalado en el considerando precedente en virtud del principio de la *inversión de la carga de la prueba*, corresponde al empleador, la carga de la prueba del cumplimiento de sus obligaciones legales y convencionales entre otras conforme a lo dispuesto por el numeral 4, párrafo a del artículo 23 de la Ley Procesal del Trabajo –Ley 29497, es decir que, corresponde a la demandada acreditar que no adeuda suma alguna por concepto de beneficios sociales.

NOVENO.- También, se debe señalar que de la lectura de la recurrida, se evidencia que el magistrado ha realizado el análisis correspondiente de los tres elementos de un contrato de trabajo, así como el análisis correspondiente para determinar que la labor que desempeña el actor correspondía a la de un obrero, teniendo en cuenta la actividad probatoria presentada por las partes del proceso, para posteriormente pronunciarse sobre cada uno de los beneficios sociales solicitados por el demandante, así como realizar el respectivo cálculo; por lo que, la afirmación realizada por la parte apelante, sobre una descripción escueta de los hechos, es contrario a la verdad; quedando de esta manera desvirtuado el agravio alegado al respecto.

DÉCIMO.- Además, corresponde precisar que en aplicación del *principio de primacía de la realidad*, entendido en términos del Tribunal Constitucional como: “(...) *en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que indican los documentos,*

debe otorgarse preferencia a lo primero; es decir, la integración prefiere lo que sucede en el ámbito de los hechos y descartar la proscrita verdad legal"¹², cuando se reconoce la existencia de la relación laboral al concurrir los elementos tipificantes del contrato de trabajo, al margen de que la formalidad pueda presentar un contrato civil, formalmente de locación de servicios o mercantil, priman los hechos; por lo tanto, el razonamiento de la parte demandada de considerar que con los contratos de locación de servicios se acredita que no existe subordinación, cuando el *A-Quo* ha verificado en los hechos los elementos de un contrato de trabajo, resulta errado y no corresponde ser amparado. Más aún, si se tiene en cuenta, que del Informe N° 001-2015, de fecha 05 de enero de 2015, que obra de folios 87 a 88, se aprecia que el demandante juntamente con otro operador, dan a conocer que se encuentran en condiciones de total precariedad, que no cuentan con los mínimos accesorios de seguridad y manifiestan que tienen problemas de salud por dichas condiciones, lo que evidencia la existencia del elemento de dependencia del actor frente a la Municipalidad demandada y no una mera coordinación, como refiere la parte demandada.

DÉCIMO PRIMERO.- Por otro lado, la Municipalidad demandada, refiere como agravio que no se ha realizado una correcta interpretación de los medios de prueba, pues precisa que el actor fue contratado para prestar servicios en una actividad específica como es la de operador de cámara de bombeo instalada en la Urbanización Popular Nueva Sullana, por lo cual, no ha ostentado la calidad de obrero municipal, además señala que las labores realizadas por el actor no son predominantemente manuales.

DÉCIMO SEGUNDO.- Ante dicho argumento, este colegiado considera pertinente señalar que, la Corte Suprema al momento de hacer la distinción entre un empleado y un obrero, ha precisado en la Casación N° 2754-2012-LIMA que, la característica general para distinguir entre uno y el otro, es revelada por las labores que realiza, pues, mientras que el primero realiza trabajos "*predominantemente intelectual*", el segundo en el trabajo que realiza trabajos "*predominantemente manual*"¹³

DÉCIMO TERCERO.- En tal sentido, tenemos que el demandante ha realizado la

¹² Sentencias recaídas en los expedientes 2132-2003-AA/TC, 1944-2002-AA/TC, 2387-2002-AA/TC, entre otras) EXPEDIENTE N° 9598-2005-PHC/TC LAMBAYEQUE de fecha 12 de enero de 2006.

¹³ Décimo Tercero considerando de la Casación N° 2754-2012- LIMA

función de un *operador* de cámara de bombeo instalada en las lagunas de oxidación ubicada en la urbanización popular Nuevo Sullana, entendiendo como *operador*, según el diccionario web¹⁴ al “*Técnico encargado de manejar y hacer que funcionen ciertos aparato*”, que aplicado al caso de autos, sería el técnico encargado de manejar y hacer que funcionen cámara de bombeo instalada en la Urbanización Popular Nueva Sullana. Por tanto, siendo que en el presente caso el demandante pretende la desnaturalización de sus contratos de locación de servicios, como operador de cámara de bombeo, queda claramente establecido que, las actividades que las actividades realizadas por el actor, responden a un oficio que exige *"más habilidad manual que intelectual"*¹⁵. En consecuencia, se trata de un obrero, y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: “*Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.*”; por lo que, tal como lo ha fundamentado el A *Quo* en el inciso e) del título *Determinación de la naturaleza de la relación jurídica entre el actor y la demandada y la desnaturalización de los contratos celebrados*, el demandante se encuentra bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728.

DÉCIMO CUARTO.- En cuanto al agravio que refiere que el demandante no ha ingresado por concurso público, es menester tener en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional en la STC N° 06681-2013-PA/TC del 23 de junio del 2016, como a continuación se cita: “*(...) como se sabe el "precedente Huatuco" promueve que el acceso, la permanencia y el ascenso a dicha plaza atiendan a criterios meritocráticos. Al respecto, es claro que no tendría sentido exigir este tipo de estándar para la reposición laboral si se tratara de plazas que no requieren tomar en cuenta esas consideraciones, ya que por la naturaleza de las funciones desempeñadas no nos encontramos ante supuestos vinculados al ingreso a la carrera administrativa (...)*”, argumentación central a partir de la cual el Tribunal Constitucional ha excluido a los obreros municipales de la aplicación del precedente Huatuco, por el cual se tenía en primer lugar prohibición de ingreso de personal a la Administración Pública por cualquier medio

¹⁴ <https://www.google.com.pe/search?q=Diccionario>

¹⁵ La Real Academia Española -Mecánico

diferente al concurso público, ratificando similar posición que ya había sido adoptada por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Laboral N° 11169-2014-LA LIBERTAD, de fecha 29 de octubre del 2015. Por lo tanto, no exigible al actor el ingreso por concurso público, como refiere la Municipalidad demandada.

DÉCIMO QUINTO.- Respecto, al agravio que versa sobre la condena de las costas y costos, la demandad afirma que siendo una entidad del Estado se debe aplicar la exoneración regulada en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, sin embargo, se debe tener en cuenta que el presente proceso se encuentra bajo la Ley N° 29497, la cual en su séptima disposición complementaria determina que en los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos, más aun cuando la Corte Suprema de Justicia ha dejado sentado criterio en la Casación Laboral N° 16440-2014- CAJAMARCA de fecha 28 de junio de 2016, determinando que el Estado en los procesos laborales no se encuentra exento del pago de costas y costos, quedando desvirtuado dicho agravio.

DÉCIMO SEXTO.- Por lo tanto, siendo que los agravios de la parte demandada han sido desvirtuados, la sentencia materia de apelación merece ser confirmada.

III.- DECISIÓN COLEGIADA:

Por los fundamentos expuestos, **CONFIRMARON** la sentencia contenida en **la resolución número nueve** de fecha diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis, inserta a fojas 221 a 240, que declara: **FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por A, contra B, sobre desnaturalización de contrato de locación de servicios y pago de beneficios sociales. En consecuencia: 2.FUNDADO el extremo de la demanda en el cual se pretende implícitamente la desnaturalización de los contratos de locación de servicios entre el actor y la demandada; en consecuencia, declaró la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado bajo el imperio de las normas laborales regidas por el Decreto Legislativo 278 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral entre la demandada B y A. 3. FUNDADO el extremo de la demanda en el cual se pretende el pago de beneficios sociales; en consecuencia, **ORDENO** que la demandada B cumpla con cancelarle al accionante A la suma ascendente a S/ 10,170.60 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA SOLES Y 60/100 CENTIMOS), dentro

del quinto día hábil de notificada con la presente sentencia. Asimismo, ORDENO la cancelación de los intereses 20 legales generados desde la fecha de interposición de la presente demanda, los mismos que serán calculados en ejecución de sentencia. 4. INFUNDADA el extremo de la demanda en el cual se pretende el pago de horas extras, labores en días domingo y feriados, pago de remuneraciones pendientes y asignación familiar. 5. Asimismo, se determinan los costos procesales a favor de la parte accionante, en la suma de S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS SOLES Y 00/100 CENTIMOS), más el 5% de este monto para el Colegio de Abogados de Sullana, esto es, la suma de S/ 125.00 soles. CON Costas, las que serán liquidadas en ejecución de sentencia. SIN Multa. 6. ARCHÍVESE los actuados en el modo y forma de Ley. NOTIFÍQUESE a las partes con la presente sentencia conforme a las normas procesales establecidas; y **MANDARON** se devuelva lo actuado al Juzgado de origen.- *Ponente señora Magistrada Jenny Cecilia E.- NOTIFIQUESE.-*

ANEXO 5-Guía de observación

OBJETO DE ESTUDIO	ASPECTOS BAJO OBSERVACIÓN					
	Cumplimiento de plazo	Claridad de resolución	Congruencia de los puntos controvertidos con la	Condiciones que garantizan el	Congruencia de los medios probatorios con la(s)	Hechos expuestos son idóneos para sustentar la causal invocada sobre Pago de beneficios sociales
Proceso sobre Pago de beneficios sociales, en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01 tramita en el Primer Juzgado Civil de Sullana, perteneciente al Distrito						

Anexo 6. Declaración de compromiso ético

Para realizar el proyecto de investigación titulado: caracterización del proceso sobre Pago de beneficios sociales, en el expediente N° 00176-2015-0-3101-JR-LA-01, del distrito judicial Sullana, Perú, 2020, se accedió a información personalizada que comprende el proceso judicial en estudio, por lo tanto se conoció los hechos e identidad de los sujetos partícipes, por lo tanto de acuerdo al presente documento denominado: ***Declaración de compromiso ético***, la autora declara que no difundirá ni hechos ni identidades en ningún medio, por ello se sustituirá los datos de las personas con códigos tales como A, B, C, D, etc., para referirse en abstracto, en señal de respeto de la dignidad de las personas y el principio de reserva.

Asimismo, declara conocer el contenido de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI; que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual. Finalmente, el trabajo se elabora bajo los principios de la buena fe, y veracidad.

Sullana, junio 2020

Dianne Maribel Roa Jaramillo DNI N°